

EL MILITARISMO EN LA ACCION POLITICA NACIONAL

JORGE SILVA LUVECCE*

a.1.- Introducción.

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas han jugado —en los 146 años de vida republicana independiente— un rol determinante en la política nacional. Mejor ilustrada se encuentra esta afirmación al procesar en términos estadísticos algunos datos históricos del desarrollo institucional del Ecuador.

De un total de 86 gobiernos, 46 han accedido al poder por medio de la fuerza y sólo 40 de ellos han sido precedidos por un ordenamiento legal, ya sea en forma de elecciones directas o indirectas. De un total de 57 presidentes, más del 30 por ciento han sido de extracción militar.

Un estudio realizado en el país señala que, aproximadamente “cada 13 años asume un gobierno militar en términos promedios”,¹ y esto sin incluir a los gobernantes que, una vez en el poder, se convierten en dictadores con el apoyo evidente de las Fuerzas Armadas.

* *Escritor y periodista chileno, autor de algunos escritos sobre la problemática latinoamericana.*

1/ *“Geografía Económica del Ecuador”, Luis Aníbal Mendoza, Quito, 1973.*

La historia del Ecuador muestra —frente a todo el panorama de permanente inestabilidad del continente latinoamericano— un indudable récord de intervención militar en las tareas de gobierno. Entre 1930 y 1965, por ejemplo, ese récord superó a todos los países de Latinoamérica con 11 cambios ilegales en la administración interna. El más cercano fue Bolivia con 10.

Estos antecedentes bastarían, en una visión simple y superficial para caracterizar el débil desarrollo democrático de una de tantas repúblicas latinoamericanas. En el caso ecuatoriano, sin embargo, existen otros elementos que han permitido que el militarismo se exprese, en la acción política, con diferentes y a veces contradictorios modelos de participación.

La magnitud de la influencia militar en el desarrollo político del Ecuador ha llevado a algunos observadores internos a sostener que “las dictaduras militares han sido las creadoras del único derecho constitucional auténticamente nacional que ha operado modificaciones en la estructura económica, social y política del país”.²

En el mismo análisis citado se afirma que “la seguridad social, la legislación laboral, la reforma agraria y otras entidades que han fortalecido las funciones del Estado, para sólo hablar de épocas recientes, han tenido su origen en dictaduras militares o civiles con respaldo militar.”³

El papel político y social de las Fuerzas Armadas —como agentes de cambio o retroceso— corresponde, lógicamente, a una determinada situación de clases sociales y partidos políticos, en estrecha relación con el problema de la dependencia de nuestros países. Por esta razón es que le incorporamos, en este estudio, como parte integrante de un avance hacia el conocimiento del desarrollo sociopolítico del Ecuador.

En este sentido creemos encontrar expresiones de peculiaridad en la participación política del cuerpo armado ecuatoriano, que le distingue frente a otros países latinoamericana-

2/ “*Relatividad del Derecho Constitucional*”, Milton Alava Ormaza, Quito, 1976, págs. 344-345.

3/ *Id.*

nos. Los tres ejemplos elegidos, aunque parezcan arbitrarios reafirman, por su contenido y época en que fueron planteados, el juicio emitido. A mayor fundamentación, ellos corresponden a un período en que la institución armada se encuentra consolidada como cuerpo del Estado. Esto es, a partir de la revolución liberal que crea y organiza la primera Escuela Militar propiamente tal.

Si reconocemos un evidente proceso de etapas en el comportamiento de las Fuerzas Armadas de nuestro continente, que definen una interesada transición desde el “profesionalismo” hacia el constituirse en alternativa política en muchos de los países latinoamericanos, tenemos que aceptar, a la luz de los hechos acontecidos en Ecuador, que esa transición, impuesta preferentemente en la última década, no ha sido necesaria en el país, por cuanto las Fuerzas Armadas han jugado siempre un rol político relevante en su vida interna.

La revolución “juliana”, —primero de los ejemplos citados— llevada a cabo en 1925, tras la crisis ya desatada del liberalismo “plutocrático”, es un movimiento de definido corte progresista y sustentado en sectores sociales del proletariado y en las incipientes capas medias ecuatorianas.

Años después, y en una década caracterizada por la acción insurgente de los pueblos sometidos de nuestra América hispana, cuya expresión más alta es la aparición de movimientos guerrilleros, y en una coyuntura de crisis del imperialismo, aparece la Junta Militar de 1963, cuyo comportamiento y actitudes represivas le sitúan plenamente en el modelo norteamericano de defensa hemisférica.

El tercer ejemplo a que hemos recurrido es de plena actualidad y se sitúa en el análisis de la administración del General Rodríguez Lara, encabezando un movimiento militar con un programa de transformaciones y desarrollo que se autoproclama de “nacionalista y revolucionario”.

En los tres casos enunciados, así como en otros antecedentes relativos a la participación de los institutos militares en tareas de gobierno, se encuentran elementos de notable semejanza: todos ellos contienen, en alguna medida intenciones de promover algunos cambios que permitan el desarrollo económico.

En todos ellos se ha operado una constante de singular in-

terés: ninguno ha logrado imponer las tareas consideradas prioritarias para emprender ese desarrollo, como son la Reforma Agraria para un país eminentemente campesino, y las bases de un auténtico proceso de industrialización.

Pese a estas notables y fundamentales limitaciones, y sin ánimo de elaborar conclusiones a priori acerca del papel jugado por los militares en el Ecuador, podemos comenzar a establecer que existen importantes matices de diferencia con el resto de países sometidos a dictadura en el continente.

Mal podríamos comparar la institucionalización del cuerpo armado de Brasil como fuerza económica y política de dominación, o el patriarcalismo represivo de un Stroessner en Paraguay, o las recientes dictaduras oligárquicas y proimperialistas de Chile y Uruguay, y aún el mismo papel jugado por los militares de Argentina, con la participación política de los militares en Ecuador.

Incluso, desde el punto de vista de composición de clases, las Fuerzas Armadas ecuatorianas poseen notables diferencias con otros cuerpos similares del resto del continente. Sus cuadros oficiales provienen, en la mayoría de los casos, de los sectores medios y, por diversas razones de orden cultural, no se integran a ellas los hijos de la aristocracia serrana o grupos más conservadores.

Formadas inicialmente en la escuela de contenido ideológico liberal, las Fuerzas Armadas ecuatorianas han sido tradicionalmente impermeables al pensamiento conservador de la Sierra. Salvo algunas excepciones históricas, “desde la revolución marcista (1845) el conservadorismo ecuatoriano —dice un estudio— ha sido antimilitarista. En cambio —agrega— el liberalismo ha gobernado entre nosotros a través de caudillos militares”.⁴

Aunque, al igual que la mayoría de las instituciones castrenses del continente, Ecuador ha sido asesorado por institutos militares extranjeros, primero alemanes, también italianos, y principalmente con la asesoría material e ideológica nortea-

4/ “La Novela Ecuatoriana”, Angel F. Rojas, Capítulo I, Primera Parte, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1948, pág. 46.

americana, se ha insinuado últimamente una apertura hacia otros países tanto de Europa, como especialmente Israel.

Al plantear el análisis de participación militar ateniéndose a sus similares desenlaces y consecuencias, de acuerdo a las diferentes coyunturas en que éste se ha planteado, debemos concluir en que todas las dictaduras han sufrido severas derrotas por el civilismo oligárquico, incluyendo aquellas que, como la de 1963, tenían un carácter profundamente reaccionario y antipopular.

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas han debido enfrentar, en cada una de las oportunidades que han sido gobierno, la oposición cerrada de algunos sectores oligárquicos sumados al bloque conservador. Esto se ha producido, especialmente, cuando estos regímenes han intentado imponer algún esquema de Reforma Agraria, incluso aquel elaborado en los marcos de la Alianza para el Progreso.

No podemos olvidar tampoco que la caída de Rodríguez Lara, a comienzos del año 1976, se produce en medio de una intensa campaña y agitación de los grupos de derecha tradicional, en los momentos precisos en que adquiriría validez la Ley de Reforma Agraria y se preveía su aplicación masiva en todo el país.

Para el caso ecuatoriano, pensamos, no pueden aplicarse definiciones ortodoxas de las fuerzas armadas como simples "instrumentos de las clases dominantes, o aparato represivo del Estado", sin precisar algunas características que les son propias y les han llevado, en función de la incapacidad de las mismas clases dominantes para lograr un acuerdo autosustentado de desarrollo económico y político, a intervenir como cuerpo armado en prevención y defensa del orden capitalista establecido.

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas han debido constituirse, por sí mismas en, necesariamente, algo más que garantía del orden social y de equilibrio de la dominación. Ellas han debido volverse alternativa, en alguna forma, para el desarrollo económico del Ecuador, en un débil esfuerzo por desalojar las posiciones más retrógradas del propio esquema burgués.

Todas estas características nos entregan, obviamente, un cuadro de contradictorios y complejos antecedentes, para cuya reflexión hemos escogido tres ejemplos de intervención militar, cuya trascendencia en la vida política interna no entrega ni presenta dudas a los analistas ecuatorianos.

a.2.- La "revolución juliana" de 1925.

El siglo XX y hasta los inicios de la década del 30, llenaron una etapa de gran convulsión política y social en Ecuador, como en muchos otros países latinoamericanos. En la práctica se vivían los estragos de una revolución liberal, cuyo desenlace ya descrito anteriormente, había entregado la República al insaciable poder financiero de la oligarquía costeña, tanto como a intereses foráneos expresados en capital bancario.

El poder real ya no residía en las funciones representativas del aparato de Estado, sino en las oficinas de la Gerencia del Banco Comercial y Agrícola (ex-Banco Anglo Ecuatoriano) cuyos grupos directivos controlaban todos los hilos de la política económica, en un período de vorágine administrativa, denominado como "gobierno de la plutocracia".

Un texto de la época describe con especial agudeza la situación que se vivía en aquel entonces:

"Hasta 1925 —señala— se sintió el peso abrumador del despotismo de la bancocracia, durante 11 años, en el cual, por múltiples motivos la economía de la Nación y sus finanzas cayeron al suelo. El pueblo suplicó sin ser oído, protestó al fin airado y las balas de los fusiles se encargaron de darle la respuesta".⁵

Entre los aspectos críticos de la economía ecuatoriana durante esos años, se encontraba la situación de "quiebra" por parte del Estado y entrega de todo el control monetario a los grupos financieros privados. Según logró establecerse posteriormente a la insurrección militar, "el Banco Comercial y Agrícola tenía en circulación 31 millones de sucres y su respaldo en oro era equivalente sólo a 3 millones y medio; el Gobierno adeudaba a éste Banco diecisiete millones de sucres, al Banco Pichincha cerca de dos millones de sucres y, al Banco del Ecuador cinco millones."⁶

La década que precedió a la revolución "juliana", y el análisis de intercambio comercial durante esos años, constituyen,

5/ *"La crisis Económico-financiera del Ecuador"*, Luis Napoleón Dillon, Talleres Artes Gráficas, Quito, Febrero 1927.

6/ *Diario "El Comercio" de Quito, Edición del 4 de Agosto de 1925. Archivos.*

claramente, un fiel testimonio del modelo eficiente de subdesarrollo que introdujo la burguesía mercantil y dependiente de la Costa.

La débil condición agroexportadora, sustentada en la producción del cacao, como principal fuente de ingresos nacionales de divisas, había logrado mantener un sostenido ritmo de crecimiento hasta 1922, como lo comprueban las siguientes cifras:

AÑO	PRODUCCION quintales
1910	798.556
1915	769.752
1916	1.079.252
1917	1.008.767
1918	819.099
1919	826.580
1920	865.010
1921	884.989
1922	877.404

Sin embargo, pese a que los volúmenes de producción cacaotera se habían mantenido estables hasta 1922, esto no se había traducido en un incremento de la ganancia. Ello, debido fundamentalmente a la gran depresión capitalista de post-guerra y a la baja violenta de los precios en el mercado mundial.

En efecto, hasta 1920 los exportadores habían conseguido un precio de 26.76 dólares el quintal, pero a fines del mismo año éste se cotizaba a sólo 12 dólares y un año después —1921— llegaba a 5.75 dólares por quintal. El “boom” cacaotero había terminado y Ecuador se quedaba casi sin alternativa.

La responsabilidad de toda la crisis se descargó sobre los recursos internos y, aunque hasta 1923, “la balanza de pagos arrojaba un saldo positivo en el mismo período— desde 1913 a 1924— se había acumulado un déficit en el presupuesto nacional que alcanzaba los 46 millones de sucres, mientras la deuda interna había crecido de 10 millones de sucres en 1913, a nada menos que 38 millones de sucres en 1925.”

De otra parte, la cotización del dólar había aumentado notablemente como lo demuestra el siguiente cuadro:

COTIZACIONES DEL DOLAR

AÑO	SUCRES POR DOLAR
1918	1.93
1919	2.25
1920	2.25
1921	3.46
1922	4.27
1923	4.79
1924	5.03

Fuente: "1919, Dependencia Económica y Política del Ecuador", por Paciente Vásquez. "1920-1925, Ecuador: Subdesarrollo y Dependencia", Fernando Velasco, p.118.

La consolidada articulación de la economía ecuatoriana al sistema capitalista mundial significaba, también, convertir a nuestros países en víctimas inmediatas de todos sus ciclos de desarrollo y crisis permanentes, cuestión que, en la década analizada terminará por arruinar definitivamente el rubro agro-exportador asignado al Ecuador en la división internacional del trabajo.

Este hecho repercutirá gravemente en el desarrollo económico ecuatoriano y, hasta 1948, se expresará en una profunda crisis política de reñido enfrentamiento entre las diferentes fracciones de poder de las clases dominantes, especialmente en la etapa comprendida entre 1930 y 1940 que llega a tener 15 gobiernos, con un promedio de 8 meses de administración para cada uno.

Las clases populares, mientras tanto, víctimas de una insostenible situación económica y social, salían a las calles a organizar su protesta y repudio al régimen liberal-plutocrático. Durante esta década que precede a la revolución "juliana", el Ecuador ve aparecer también, las primeras organizaciones políticas de los trabajadores que constituyen primero algunos Núcleos Socialistas y luego el Partido Socialista Ecuatoriano, del cual se desprende, a fines del mismo período, el Partido Comunista del Ecuador.

7/ *"Dependencia Económica y Política del Ecuador"*, Paciente Vásquez, pág. 26.

Las recientemente formadas organizaciones obreras, principalmente del sector de servicios de Ferrocarriles, Luz Eléctrica y Empresa de Carros, bajo la dirección centralizada de la Confederación de Obreros del Guayas, en la zona de la Costa, llamaron a la huelga y a una movilización nacional.

Las demandas reivindicativas estaban dirigidas a mejorar los salarios y reducir las horas de cada jornada de trabajo, obteniendo como respuesta del gobierno la trágica matanza del 15 de Noviembre de 1922, a la que siguió una feroz masacre de campesinos en la Hacienda Leyto.

La coyuntura interna permitía, asimismo, que la base social del movimiento de protesta fuera ampliándose con otros sectores del país. Los débiles grupos medios formados por intelectuales y profesionales de reciente promoción, producto en gran medida de la democratización impuesta en las primeras épocas del régimen liberal, y que no lograron su integración a las rígidas estructuras de poder de aquel entonces, coincidirán plenamente con las fuerzas populares. Su participación determinará, de igual manera, la explosividad que va adquiriendo el movimiento.

Una vez ya estructurada la alianza de diferentes grupos sociales, la participación militar se convertía en un aspecto fundamental para el éxito de la oposición. Los cuarteles se transforman en verdaderos foros de discusión política. En medio de esa ebullición se decide la asonada del 9 de Julio de 1925, con el objetivo de desalojar a los calificados entonces como "gobiernos títeres" de la plutocracia liberal.

El movimiento militar contiene, entre sus características, una serie de elementos que le distinguen prontamente de análogas experiencias de intervención. En primer lugar, la dirección recae no en los viejos generales y oficiales de más alta graduación, sino en los cuadros oficiales intermedios. En segundo lugar, carecen de un caudillo, y su punto de unidad lo constituye un programa de 12 medidas discutidas democráticamente en las bases militares.

"Sus principales gestores —señala un estudio— son oficiales jóvenes del Ejército que, al tiempo que luchan por reivindicaciones profesionales, interpretan el sentir del pueblo. Lo apoyan los grupos socialistas que pronto, en 1926 forman el Parti-

do Socialista Ecuatoriano. Asimismo, lo apoyan también muchos elementos de la pequeña burguesía y de la burguesía progresista.”⁸

El programa de 12 puntos, elaborado dos meses antes del golpe de Estado —el 20 de Mayo de 1925— con participación de representantes y delegados de diferentes reparticiones militares, plantea los siguientes objetivos:

1. Centralización de rentas y servicios administrativos;
2. Establecimiento de una absoluta economía, suprimiendo todo egreso innecesario que lleve a la nivelación del presupuesto;
3. Supresión de la ley de inconvertibilidad de billetes; y establecimiento del Banco Nacional que de valor a la moneda;
4. Formación de un verdadero plan al que se sujetará la construcción de obras públicas para darle mayor impulso;
5. El gobierno se encargará de fomentar la instrucción primaria de acuerdo a los dictados modernos, limitándose al mismo tiempo la superior;
6. Implantación de leyes eficientes para el mejoramiento del obrero, fuerza viva del Estado;
7. Organización del Ejército, de modo que responda a las necesidades y aspiraciones del país;
8. Revisión completa de leyes militares y creación de las que fueren necesarias;
9. Implantar leyes que tiendan a dignificar la raza indígena;
10. Modificar la constitución en el sentido de que el presidente de la República será responsable de todos sus actos administrativos;
11. Gravar con el 25 por ciento a los capitales que emigran, motivados por el creciente ausentismo;
12. Creación del impuesto progresivo, fijándose un capital mínimo que favorezca al proletariado.⁹

8/ *“Historia de la Acción Clerical en Ecuador”*, Oswaldo Albornoz, 1963, pág. 204.

9/ *“Revista de Estudios Militares, El Ejército Nacional”*, Año IV, No. 26, Quito, 1925.

La plataforma expresaba, como es natural, una mezcla de seria intencionalidad reformista, orientada al rescate de la autonomía y funcionalidad del Estado, y de otra parte mostraba la todavía desordenada y caótica influencia ideológica de la época, representado principalmente en las nuevas corrientes del liberalismo, que desde 1925 pasará a denominarse Partido Liberal-Radical, en un esfuerzo por reivindicar la calificación con que se designarán a los sectores de Alfaro.

Muchos de los liberales de izquierda pasaron a ser los primeros organizadores y fundadores del Partido Socialista Ecuatoriano y del Partido Comunista, que, en muchos casos, procedían a mezclar teóricamente los principios de socialismo científico y utópico o bien incorporaban concepciones del pensamiento liberal tradicional al análisis marxista que daba sus primeros pasos en el país.

Estos sectores tuvieron un peso decisivo en la elaboración del nuevo modelo a aplicarse por la revolución juliana y, aunque prontamente desplazados de su esfera de influencia, alcanzaron a jugar un determinante rol en el proceso de cambios que se iniciaba.

La revolución "juliana" devendrá en el tercer esfuerzo por aplicar un modelo económico y político después de la hegemonía gamonal de la sierra y del predominio oligárquico liberal de la Costa. Pero, a diferencia de los anteriores el proyecto carecerá de una base sólida de apoyo en sectores sociales definidos y de acción coherente.

El plan de reformas, lejos de atender a las causas estructurales de la crisis, continuará sosteniendo una lucha "por encima" con determinados sectores oligárquicos dominantes. Limitado por dos flancos, el proyecto revolucionario no se atrevió tampoco a enfrentar la propiedad terrateniente y no alcanzó a plantear modificación alguna en orden a reformar la tenencia agrícola.

La nueva administración "juliana" desechó también una alianza más profunda con los sectores populares para enfrentar el poder bancario y financiero de la costa y se inclinó más bien hacia la aristocracia serrana, en quien encontraría un aliado mejor estructurado para cumplir estos objetivos.

Aunque sin tocar las estructuras tradicionales de poder, el movimiento juliano logró frenar el caos económico desatado por la voracidad oligárquica de la costa e introdujo algunas modificaciones importantes en la legislatura, con algunas medidas proteccionistas para la clase trabajadora. Entre estas puede considerarse la creación del Ministerio de Previsión Social, y una nueva reglamentación de los horarios de labores y descanso, intentándose también algunas medidas para aliviar las duras condiciones del inquilinato campesino.

La inestable y confusa etapa de dirección amplia y compartida de la revolución "juliana" fue reemplazada, a menos de dos años de iniciada la misma, por la designación de un presidente civil con respaldo de las Fuerzas Armadas.

Ello era el resultado de una situación claramente justificada en los estudios documentados de la época, por cuanto el equipo militar nunca se encontró en condiciones de aplicar por sí mismos el programa de gobierno, delegando esta responsabilidad, la mayor de las veces en colaboradores civiles que ocuparon carteras más importantes de la administración.

La crisis financiera, originada en el caótico manejo privado del sistema monetario interno, y la debilidad del aparato estatal para asumir la iniciativa de elaboración de una nueva política, hizo que el gobierno "juliano" contratara los servicios de una Comisión norteamericana encabezada por el profesor Walter Kemmerer, de la Universidad de Princeton, principales responsables de la nueva legislación de Bancos, Monedas, Aduanas y Hacienda.

La presencia de la misión extranjera tuvo, como era de esperar, contradictorias repercusiones en la vida pública. Sus actividades contribuyeron a la creación del Banco Central, en el año 1927, que fuera fundado "para un período de 50 años pudiendo ampliarse el plazo a solicitud del Banco y en virtud de una Ley. El capital autorizado fue de 10 millones de sucres, con posibilidades de aumentarse."¹⁰

La constitución del Banco Central se realizó mediante un sistema de suscripciones de acciones tipo A y tipo B. Las primeras fueron suscritas por los Bancos Comerciales e institucio-

10/ *"Frustración Política en 22 años"*, José Alfredo Llerena, Quito, pág. 19.

nes bancarias en general, y las del tipo B sin restricción, salvo para el Gobierno y Bancos Asociados, a quienes se vetaba la posesión de este tipo de acciones.

La creación del Banco Central confirió, obviamente, un mayor nivel de seriedad y solvencia a las operaciones económicas del Estado y administración política del país, y ha sido considerada como una de las grandes realizaciones del movimiento militar de Julio. De allí en adelante, sólo este organismo estaba autorizado para emitir papel billete y moneda, reglamentándose la prohibición en toda la República.

En su conjunto, las nuevas disposiciones legales acerca del sistema financiero nacional, lograron restringir notablemente la capacidad de manejo y poder de la plutocracia costeña que, en algunos casos derivó en el quiebre de muchas de las instituciones bancarias, pero el Gobierno no llegó a plantearse una solución de orden más radical, como lo habría sido la nacionalización de estos organismos, cuyas repercusiones habrían pesado positivamente hasta el día de hoy.

Como bien apuntan algunos criterios, el gobierno juliano no dió un verdadero golpe de muerte a la plutocracia y, de alguna manera, continuaría subsistiendo de sus préstamos e incrementando la esfera de poder que había conducido al país a la reciente crisis total.

A la creación del Banco Central siguieron otras medidas, como la creación de la Superintendencia de Bancos, la supresión de los Estancos particulares, formación de una Caja de Pensiones para Empleados Públicos y la promulgación de una Ley de Protección a la Industria nacional.

En el plano de realización política, la llamada revolución "juliana", y en especial la Asamblea convocada por ésta en 1929, "sentó algunos principios progresistas para la época, como el de la función social de la propiedad y la representación de las minorías políticas; estableció además el *habeas corpus* y reglamentó derechos para los hijos ilegítimos."¹¹

Aunque sin alcanzar a tocar las razones fundamentales del

11/ *"El Proceso de Dominación Política en Ecuador"*, Agustín Cueva, México 1975, pág. 25.

retraso económico y político del Ecuador, la ideología y programa alteró algunas de las características del antiguo orden liberal plutocrático, modificando proporcionalmente las estrictas relaciones de poder establecidas por la oligarquía, favoreciendo con ello algún nivel de movilidad y expansión de las clases medias.

Los sectores marginados no fueron beneficiados mayormente por el proceso de cambios emprendido y, una de las principales causales para que ello no ocurriera, estuvo dado por la alianza del movimiento con la aristocracia serrana que impuso la continuidad de la tradicional relación servil, especialmente entre la Sierra.

De todas las opiniones eruditas sobre el desenlace de la revolución juliana, adquiere destacada importancia aquella que explica sus limitaciones especialmente la no transformación de la estructura feudal ni el control a la penetración del imperialismo en la "no presencia de una clase revolucionaria en la dirección del movimiento y que pronto llevó a un fracaso de la revolución".¹²

El fenómeno de no constitución de clases sociales capaces de cumplir su ciclo de desarrollo legitimando una clara alternativa programática en un proyecto capaz de arrastrar otros sectores sociales y desplazar los viejos esquemas de producción y poder político, será una de las constantes trágicas en la historia política del Ecuador, y en sus causales podemos desprender toda la historia de frustración con que ha vivido el país y específicamente los grupos que han intentado empujar la historia.

En el caso de la revolución "juliana", los militares jóvenes y las personalidades más progresistas que les acompañaron en las primeras jornadas, fueron prontamente desplazados y el poder entregado al Dr. Isidro Ayora, cuestión que, según coinciden varios analistas, permitió acentuar notablemente la penetración norteamericana.

Los años siguientes permitieron que las inversiones de los grupos monopólicos norteamericanos llegaran a la suma de 11 millones de dólares, cantidad de gran significación si pensamos

12/ *"Historia de la Acción Clerical en Ecuador"*, Oswaldo Albornoz, pág. 204 y siguientes.

que dicha suma sólo logró ser superada después de la segunda guerra mundial.

Por otra parte, la aplicación de los planes elaborados por la misión norteamericana Kemmerer habían obtenido, entre algunas de sus consecuencias, la sistematización de una medida que constituirá, a lo largo de nuestra historia, necesidad permanente de los Estados Unidos, ésto es la devaluación de la moneda y que, en esos años, significó que el sucre fuese fijado entonces en 20 centavos de dólar.

El acelerado control foráneo sobre la economía ecuatoriana se expresó de diversas formas. Entre éstas, estuvo la fijación de aranceles favorables a los consorcios internacionales. Dicha actitud es fácilmente explicable si recogemos el testimonio histórico de algunos autores que denuncian que, para que ello se viera facilitado, "los puestos claves se encontraban en manos de extranjeros: un Mr. Rody fue el Director General de Aduanas, un tal Mr. Tompkins era Superintendente de Bancos y un Mr. Schwulz, asesor principal del Banco Central."¹³

La caída y final derrota de la administración heredera de la revolución "juliana" se registra a mediados del año 1931, en momentos de aguda disminución de las exportaciones que, según un informe del Banco Central, se redujeron a 15 millones de dólares en 1928 a casi 7 millones en el año mencionado anteriormente. El país enfrentaba y no resistía, una vez más, una grave crisis económica y financiera.

La estructura administrativa se había modernizado, pero el poder seguía controlado por ávidas minorías que supieron servirse de los nuevos mecanismos para su propia acumulación e intereses como socios ya menores del imperialismo en expansión.

La balanza de pagos mostró, hasta 1940, un alto saldo de déficit entre el volumen de exportaciones e importaciones, caracterizándose el período siguiente como de crisis total de la burguesía agro-exportadora y mercantil de la Costa, y recuperación política de los sectores conservadores de la Sierra, que había iniciado ya una bien elaborada ofensiva para recobrar el poder en todo el país.

13/ *Id.*

a.3.- La Junta Militar de 1963.

Otro mes de Julio, en una década de agudo conflicto y elevado enfrentamiento entre los Estados Unidos de América y Latinoamérica, trajo consigo al Ecuador una nueva dictadura militar, la Junta de 1963.

La coyuntura en que se produce este violento cambio correspondió, más que a razones de crisis interna, al agravamiento de las relaciones de poder entre la metrópoli norteamericana y sus países dependientes. Elemento clave y definitorio en esta situación era la reciente liberación de Cuba y su categórica decisión de realizar una revolución socialista que, en lo externo, se manifiesta en una dura posición antimperialista.

Algunos autores —especialmente A. Cueva— encuentran entre ambas dictaduras militares (1925 y 1963) fundamentados elementos afines, en cuanto a la composición social de las mismas, situando su origen y generación en los sectores de clase media, pero reconociendo asimismo “notables diferencias de orientación política entre aquellas.”¹⁴

Ello se comprueba fácilmente en la decidida y drástica actitud represiva de la Junta Militar en contra del movimiento popular*, y en el evidente apoyo que recibe, desde un comienzo, por los Estados Unidos. La dictadura, sin embargo, incorporó en sus programas una amplia gama de medidas reformistas, cuyo contradictorio carácter motiva la atención de analistas y estudiosos del fenómeno militarista en Latinoamérica.

La llegada del nuevo equipo militar coincide con los primeros esfuerzos de teorización acerca del papel de los militares en el contexto de la nueva estrategia “kenediana” para promover algunos cambios garantizando, asimismo, la estabilidad en la dependencia. La política de Alianza para el Progreso contemplaba, sin embargo, una preferente utilización de regímenes

14/ Sobre este punto puede consultarse “La Crisis de los años 60”, Agustín Cueva, cit. *Ecuador: Pasado y Presente*, Ed. por Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Central, Quito, 1976.

*/ La Junta que dió el golpe de 1963 declaró el Estado de Sitio, anuló la constitución, disolvió la legislatura, canceló todos los derechos civiles y puso en la ilegalidad al Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda revolucionaria, encerrando a cientos de militantes políticos de la izquierda en la cárcel.

civiles, conducidos por sectores dinámicos de la burguesía, antes que el gobierno militar típico.

Pese a ello, las especiales condiciones del Ecuador, que se expresaban principalmente en la incapacidad de las burguesías para ofrecer un esquema coherente de dominación y desarrollo económico que, consecuentemente habían acelerado el deterioro económico y político interno de los últimos años, hicieron que el imperio del norte justificara la excepcionalidad concedida al país y que se manifiesta en el pronto reconocimiento del nuevo régimen militar.

La cuestión fue más explícita y categóricamente señalada en la entrevista concedida por Edward M. Martin, Secretario Adjunto para las cuestiones Interamericanas, al diario New York Herald Tribune, al especificar que "el programa de reformas de la Junta ecuatoriana era verdaderamente importante y estaba gobernando a través de un Gabinete capaz y representativo."¹⁵

La importante excepcionalidad concedida al Ecuador se ve especialmente recalcada si consideramos que la posición política de Washington, en esos mismos años, había sido la de condenar otros golpes militares y, entre 1962 y 1963, negó toda ayuda económica y militar a cuatro de siete países en que se había roto la constitucionalidad.

Era obvia la total desconfianza en los sectores civiles ecuatorianos, por parte de los estrategas de la Casa Blanca, para la aplicación de su nueva política: contener el avance de los sectores populares operando reformas en los niveles más atrasados de la economía, especialmente en el sector agrícola.

Era la época en que se comenzaban a materializar variados frentes de conflicto entre los Estados Unidos y el resto de países bajo su control, y que algunos analistas han dado en llamar "estrategia de respuesta graduada", a la reacción tenida frente a los mismos.

El objetivo de evitar, a toda costa, la creación de nuevas situaciones revolucionarias en América Latina, obligaba a los Estados Unidos a contener las administraciones de corte demasia-

15/ *Diario New York Herald Tribune, U.S.A., Octubre 1963.*

do derechistas y conservadoras, llegando inclusive hasta la eliminación física de alguno de estos elementos, como fue el caso de Trujillo en Santo Domingo.

Esta situación duraría hasta 1964 en que se proclama la denominada doctrina Mann, que estipula, de acuerdo a las declaraciones del nuevo Secretario de Asuntos Latinoamericanos, la autorización para los golpes militares y las dictaduras represivas en el continente.

El esquema trazado por la Alianza para el Progreso comenzaba a fracasar ya estrepitosamente y, en la mayoría de los países latinoamericanos se agitaban con fuerza las consignas de liberación, como inevitable corolario de la inadecuada e insostenible política de reformas dentro de un continente de tan dramáticos desniveles económicos y sociales.

La Junta Militar ecuatoriana emergía con absoluta coincidencia e inmejorable afinidad con la táctica de la Casa Blanca. Incluso más aún, lograba integrar en alguna medida, los afanes desarrollistas iniciales de la década y las necesidades represivas del enfrentamiento entre la metrópoli y la creciente insurgencia del movimiento de masas estimulado por el ejemplo cubano.

En los Estados Unidos se comenzaba a hablar, eufemísticamente, de los "militares de nuevo tipo", capaces de promover el cambio social dentro de un ambiente de "orden y estabilidad interna", oponiéndole al "civilismo ineficiente y corrupto"; dicha posición expresaba también el temor, principalmente, a las formas inclusive populistas de administración, que permitían un juego ya prohibido en todo el continente: tolerancia con la nueva Cuba socialista.

Relevante ejemplo de este temor a las formas populistas izquierdizantes fue el golpe de Estado patrocinado por los Estados Unidos contra Joao Goulart en Brasil, ese mismo año. El gobierno brasileño se negaba a romper relaciones con Cuba e inclusive pretendía nacionalizar las concesiones de hierro en Minas Gerais, en manos del monopolio norteamericano Hanna Mining Company.

El imperio americano estaba ya en pie de combate y preparaba con audacia todas sus líneas ofensivas. Más de quince mil soldados entrenados en la zona del Canal, en Panamá, asaltan y bombardean con napalm las aldeas de Marquetalia en Colombia, y junto a soldados y asesores norteamericanos ocupan la

denominada "república independiente de Marquetalia", principal centro de operaciones del movimiento de liberación colombiano.

La acción contrarrevolucionaria se acentúa con increíbles niveles de crueldad y una de sus operaciones más violentas y descaradas será la invasión a la República de Santo Domingo de cuarenta mil infantes de marina en el año 1965.

Con el único afán de esquematizar el período que tratamos podríamos concluir en su división en dos etapas correspondientes a la última década:

La primera mitad sirve para apretar y consolidar estructuras de poder en la retaguardia del enfrentamiento, esto es América Latina, mediante, aparentemente contradictorios pero no antagónicos programas de sometimiento; y,

La segunda etapa, refleja ya un claro deterioro en las relaciones de dominación que son prontamente aprovechadas por las vanguardias políticas, acelerando la lucha de clases interna y estimulando las tareas antimperialistas en otros sectores sociales y políticos intermedios.

Esto permite que los países de mayor desarrollo político, como es el caso de Chile y Uruguay, avancen exitosamente tras consignas y plataformas de contenido más radical y con programas que contemplan reivindicaciones de carácter socialista. En otros países —casos de Perú y Bolivia— y en alguna medida también Argentina, cobran fuerza los programas de preeminencia antiimperialista y surgen, al interior de las Fuerzas Armadas, corrientes nuevas como es el nacionalismo.

Esta nueva situación afectará, decididamente, a todo el continente latinoamericano, en donde, de acuerdo a las peculiaridades y características de cada país, se comenzarán a vivir etapas de orden similar: nacionalismo panameño, democratismo y nacionalismo en Venezuela, nacionalismo en Ecuador, etc.

Otras actitudes podrían ejemplificar y complementar este criterio, como la rápida decadencia de la OEA (Organización de Estados Americanos) que pasa a ser sobrepasada con la apertura de relaciones con Cuba, por parte de algunos países, etc

En el plano económico se estimula la iniciativa de integración latinoamericana y el Pacto Andino se ve fortalecido por la presencia de una serie de gobiernos cuya sustentación tiene un fuerte apoyo de grupos industriales que intentan, una vez más, una fórmula nacionalista de desarrollo autónomo.

Una vez esbozada la coyuntura mundial y latinoamericana que precedió a la Junta Militar ecuatoriana de 1963-66 resulta más fácil la comprensión del esquema militar de una administración que ha sido calificada, creemos correctamente, como parte del proyecto reformista pro-imperialista.

El golpe de Estado que derrocó al presidente interino Carlos Julio Arosemena el 11 de Julio de 1963 contó con una bien orquestada y previa amplia participación de los sectores más conservadores del país, la Iglesia y la CIA norteamericana.

Arosemena había asumido el poder el 8 de noviembre de 1961, en medio de una violenta situación política interna, donde la participación de algunas fracciones del ejército había impuesto la renuncia del presidente constitucional José M. Velasco Ibarra. La Fuerza Aerea terció en el conflicto e impidió el nombramiento interino de un miembro de la Corte Suprema, apoyando la decisión del Congreso para que se designara al vice presidente Arosemena.

La llegada de Arosemena al sillón presidencial contó también con una amplia movilización de grupos populares que como URJE (Unión Revolucionaria de Juventudes Ecuatorianas), FEUE (Federación de Estudiantes Universitarios Ecuatorianos) y la CTE (Confederación de Trabajadores Ecuatorianos), manifestaban algunas esperanzas en algunas promesas planteadas por Arosemena. Especial interés merecía la decisión asumida por el Ejecutivo en orden a no romper relaciones con Cuba.

La primera etapa del gobierno de Arosemena logró, como era de esperar en momentos previos a las definiciones, un casi generalizado consenso de apoyo de parte de casi todas las fuerzas políticas del país. La derecha y, especialmente el Partido Conservador, centraron su campaña publicitaria en pos del rompimiento de relaciones con Cuba, empujando la entrega de un rápido pronunciamiento presidencial.

El nivel de presiones ejercidas contra Arosemena abarcó cuanto frente utilizable podemos imaginar. El gobierno de Estados Unidos hizo efectivo un préstamo largamente tramitado, por ocho millones de dólares con el objetivo de estabilizar el presupuesto interno del Ecuador, al mismo tiempo que arreciaba una bien organizada campaña publicitaria en contra del peligro comunista en el país.

Un propio agente de la CIA, el norteamericano Phillip Agee, nos describe esta campaña durante su misión en Ecuador, el 19 de Enero de 1962:

“Se lanzó la campaña —dice— en Quito con toda su fuerza. La manifestación en contra de Cuba y el comunismo fue enorme ayer. Después que los organizadores financiados por ECACTOR* pasaron varios días promoviendo la manifestación, el Ministro de Gobierno, conocido como liberal, prohibió ayer las manifestaciones en todo el país.”¹⁶

El libro de Agee, hoy convertido en best-seller mundial, testimonia también otros aspectos de la infiltración americana, específicamente relacionados con algunos partidos políticos de la derecha:

“La BASE financió —agrega el informe de la CIA— una demostración en Guayaquil con atentados contra iglesias realizados por grupos social cristianos, con activa participación del Frente de Defensa de la Democracia, nuestra propia organización laboral CROCLE*, los liberales, conservadores y el movimiento fascista ARNE.”¹⁷

“Con la acción política —confiesa Agee— y la propaganda tratamos de hacer lo mismo que se hizo con Velasco: cortarle apoyo mediante las publicaciones anti Cuba y anticomunistas, para que quede sólo con la extrema izquierda”.¹⁸

*/ ECACTOR: Título en clave del proyecto patrocinado por la CIA para organizar en Ecuador toda la campaña de rompimiento de relaciones con Cuba. Tomado del libro “Inside the Company”, por Phillip Agee, pág. 113.

**/ CROCLE: Título en clave del proyecto de organizaciones laborales paralelas financiadas por la CIA en Ecuador y del cual fue protagonista el propio Phillip Agee.

16/ “Inside the Company” Phillip Agee.

17/ Id.

18/ Id.

La suerte estaba echada para la administración civil y, ya en las postrimerías del régimen de Arosemena se intenta salvar el escollo de las relaciones con Cuba, llamando a un plebiscito que resuelva al respecto. La idea, descartada posteriormente por el Tribunal Electoral, no sirvió para salvar un gobierno ya condenado por la gran potencia del norte.

Finalmente, y en medio de una estruendosa acción terrorista de derecha que maquiavélica y hábilmente orientada colocó bombas en casas de importantes clérigos e iglesias, inclusive del Cardenal, provocó la definitiva ruptura de relaciones con Cuba.

En otro intento por reforzar la administración, se colocó un nuevo gabinete de marcada orientación anticomunista que tampoco lograría contener un golpe militar ya resuelto.

Durante este mismo período se producen algunas divisiones en el seno del movimiento marxista, y la izquierda más radicalizada decide pasar a la acción armada adoptando el método de guerrillas, cuyos grupos de avanzada son descubiertos en un campamento cercano a Santo Domingo de los Colorados.

La llamada "guerrilla del Toachi" —por la zona geográfica que pensaba cubrir— fue una acción desesperada y contó con prácticamente una total desorganización desde sus inicios. Para peor, se sumaba la infiltración de agentes de la propia CIA en sus niveles de dirección, lo que permitió un pronto exterminio del foco guerrillero, en su fase de gestación.

La organización del movimiento guerrillero estuvo a cargo de algunos dirigentes del PCE (Partido Comunista Ecuatoriano), que actuaron según comprobadas investigaciones "sin control partidario" y originado principalmente en el frente de masas juveniles (URJE) que en las organizaciones partidarias.

Posteriores entrevistas que hemos sostenido con algunos dirigentes y miembros del grupo que participó en este movimiento insurgente coinciden en señalar y reflejar la absoluta orfandad de recursos y planificación del mismo. Carecían de armamento y preparación básica, fuera esta orgánica como militar, y más parecían, según posteriores criterios "un grupo de boy-scouts tras una aventura de exploración a la selva."

El hecho sin embargo, sirvió plenamente a los planes ya largamente elaborados por el Servicio de Inteligencia americano, en orden a reemplazar el gobierno civil de Arosemena por

una Junta Militar. Veamos como era interpretado el aplastamiento guerrillero por la CIA:

“Por lo menos —escribe Phillip Agee— quedan dos factores de importancia: primero, la facilidad con que las guerrillas fueron aplastadas le da a los militares ecuatorianos una nueva confianza; segundo, —agrega— esta operación causará la división de la extrema izquierda, tanto dentro como fuera del PCE, entre aquellos que favorecen la pronta acción armada y aquellos que están por la continuación del largo trabajo de masas. En ambos casos —destaca el funcionario norteamericano— esta aventura frustrada es favorable para nosotros.”¹⁹

Pese a todas las presiones ejercidas por los grupos económicos de poder y el Departamento de Estado norteamericano, los “guerrilleros” tuvieron un trato blando por parte de Arosemena quien, en una de sus últimas jugadas intentó revertir su posición haciendo algunos cambios en las Fuerzas Armadas que devinieron en nueva crisis política y nuevo gabinete, muchos de cuyos miembros figuraban —según consta en los testimonios— en la planilla de pagos de la CIA.

En el interior del país, mientras tanto, mejoraba la correlación de fuerzas favorable al Partido Conservador, que gana las elecciones parlamentarias de la nueva legislatura, al mismo tiempo que Arosemena viajaba a entrevistarse con Kennedy en los Estados Unidos obteniendo paralelamente algunos préstamos del FMI para estabilizar su crédito externo.

Las posibilidades de afirmarse en el poder eran casi mínimas y la campaña anticomunista crecía en vigor y calidad. Las denuncias hablaban de infiltración comunista en el gobierno y otras formas ya tradicionales de este tipo de acciones.

Días antes de la caída de Arosemena, los políticos derechistas visitaron al embajador de los Estados Unidos en Ecuador y solicitaron prácticamente la intervención militar, esgrimiendo el riesgo de que en las próximas elecciones —1964— ganara nuevamente José M. Velasco Ibarra.

19/ *Id.*

Dos semanas después, asumía la Junta Militar, integrada por los altos mandos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Un Coronel, de apellido Gándara, aparecía como el hombre clave detrás de la misma. Las primeras declaraciones contenían todo el confuso lenguaje reformista y anticomunista elaborado por los nuevos ideólogos de los Estados Unidos.

Dicha confusión e incapacidad de conciliar ambos planteamientos se convertirá, durante toda la administración militar, en uno de sus principales problemas y el nivel de contradicciones que alcanzara el programa de la dictadura generará, con el correr de los años, una de las más fuertes oposiciones políticas a un régimen en lo que registra la historia ecuatoriana.

El modelo "tecnocrático" de los militares.

La nueva Junta Militar ecuatoriana contó, desde sus inicios, con una amplia ayuda externa de parte de los Estados Unidos. Durante todo su período de administración recibió, a través de diferentes mecanismos crediticios una suma cercana a los 84.5 millones de dólares, sin considerar la ayuda militar que alcanzó a 9,3 millones de dólares.

La cantidad no deja de ser considerable, especialmente en una época en que las exportaciones agrícolas habían sufrido ya un serio declinamiento en el mercado externo y aún no se visualizaba toda la potencialidad petrolera del país.

La incrementada ayuda externa había sido condicionada a la aplicación de un amplio plan de reformas, incorporado a la declaración de principios de la Junta Militar y cuya explícita aprobación había sido ya sancionada por las oficinas encargadas de la Casa Blanca.

El frente económico sería cubierto —al menos en la Declaración de Principios— por los siguientes objetivos centrales a realizar: reforma agraria, reforma tributaria y de arancel de aduanas, y un amplio plan de obras públicas para la infraestructura del país.

En lo político, la Junta anunció un plazo de cuatro años para volver al civilismo constitucional "una vez neutralizados los elementos de conmoción interna y destruida la extrema izquierda,"²⁰ autocalificándose como un gobierno "eminente-

20/ Fuentes Consultadas: prensa local. Primeros Informes públicos de la Junta Militar.

mente técnico y apolítico”, en la búsqueda de realizar las transformaciones nacionales más urgentes.

En lo externo, la Junta Militar adoptó una abierta posición militante con los recientes acuerdos tomados en la Reunión de Punta del Este, reafirmando todos sus compromisos con el mundo occidental y especialmente los Estados Unidos y declarando su firme convicción en la lucha anticomunista del Hemisferio.

En este plano, sin embargo, habría sido detectado —según denuncia A. Cueva— toda una decisión entreguista de parte de la Junta, en orden a renunciar, producto de las presiones norteamericanas, a la soberanía marítima de las 200 millas —cuestión que habría sido posteriormente comprobada en la Asamblea Constituyente que le reemplazó.

Los frentes programados como susceptibles de reformas, según coinciden muchos analistas del proceso ecuatoriano, habrían mostrado un contundente fracaso al finalizar la gestión.

La tímida Ley de Reforma Agraria expedida por la Junta Militar del año 1963 sufrió el mismo destino que la mayoría de proyectos análogos dictados bajo auspicios de la Alianza para el Progreso en el resto de países del continente latinoamericano.

Sus objetivos —más políticos que económicos— eran, principalmente restar base de apoyo a los movimientos insurgentes del campo. En todo caso, una de sus principales realizaciones en este sentido, esto es revertir el tradicional “huasipungo”, transformó a los mismos en estrangulados minifundistas, los que sin obtener ayuda de parte de algunos organismos técnicos y crediticios, pese a la creación del IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria) sucumbieron como unidad productiva y aumentaron extraordinariamente el drama urbano de cesantía y sub-empleo.

La decisión de operar algunas reformas en el agro recibió, como era natural, desde un comienzo una fuerte oposición de parte de las Cámaras de Agricultura y especialmente de la aristocracia serrana. Sus presiones y firmes estructuras de poder doblegaron rápidamente la decisión y arrogancia de la Junta Militar que concedió, en aquella oportunidad, un plazo de tres años para trabajar la tierra, antes de hacer efectiva la legislación reformista.

Archivada la contradicción agraria, vendría un posterior enfrentamiento que no tendría los mismos resultados de conciliación. La Junta dirigió sus pasos contra la oligarquía costeña, a quienes intentaría controlar las ganancias mediante una nueva Ley de Aduanas y a través de restrictivos decretos a las importaciones. Hasta allí llegaría el ánimo reformista y las intenciones de mejorar, en algo, la desigual distribución interna del ingreso.

Como dato interesante, cabe señalar que —diez años después— durante otra administración militar, esta vez de marcado acento progresista, como lo fuera la dictadura militar de Rodríguez Lara, será el mismo enfrentamiento, producto de similares aunque más avanzados decretos restrictivos, el detonante de la acción civil contra el régimen.

En ambas oportunidades, la oligarquía comercial importadora, agrupada en las poderosas Cámaras de Comercio, con largos tentáculos hacia la Banca y Finanzas, será la vanguardia de un enfrentamiento que provocará la caída de un régimen que cuenta con todo el poder de las armas, y en el caso tratado, el apoyo inclusive de los Estados Unidos.

Quizás la única excepcionalidad al rotundo fracaso de la política económica de la Junta Militar, lo constituyó el plan de modificaciones tributarias. La reforma en la recaudación de ingresos fiscales, según comprueban algunos estudios e investigaciones realizadas, tuvo un acierto que podríamos calificar de limitado.

Parte de toda la política “desarrollista” impulsada por la Alianza para el Progreso, consultaba la aplicación de severas reformas en la recaudación fiscal, de tal manera de apoyar los planes con recursos internos expresados en mayores impuestos y gravámenes a los sectores poderosos de la economía.

Esto permitiría obviamente, incrementar la hacienda pública con nuevos fondos, que podrían utilizarse en obras internas y contribuirían a prescindir un poco más del crédito externo.

La verdad es que, en el caso ecuatoriano, en todo lo concerniente a esquema tributario, el país se encuentra notablemente retrasado respecto a otros países del continente. La Junta Militar de 1963 intentó centralizar dicha recaudación, aplicando criterios y tecnología más avanzada, pero contó, asimismo, con fuerte oposición de organismos y empresas autónomas

—especialmente en Guayaquil— que recibían directamente esos ingresos.

Entre los aspectos más logrados de reforma tributaria, se considera la simplificación de la legislación respectiva, de anacrónico y contradictorio contenido, llegando a aplicarse algún nivel de multas a la evasión pero sin llegar a calificarla en la tipificación de delito como ha sido planteada en las legislaciones más avanzadas de la democracia occidental.

La iniciativa de modificación, aunque débil, sentó un importante precedente para rescatar la importancia de este control fiscal y sirvió, posteriormente, durante la administración de Rodríguez Lara, para lograr algunos avances más significativos en esta dirección.

Hasta allí, en apretada síntesis, podemos resumir los resultados de la política económica de la Junta Militar. El gobierno “tecnócrata y neutral”, como pretendió denominarse había contado, sin embargo, con los mejores padrinos externos y, pese a los innumerables elementos coadyuvantes a su programa no logró imponer ninguna de las reformas planteadas y, a fines de su gestión, la balanza de pagos mostraba una situación deficitaria, especialmente provocada por el aumento de las importaciones.

La mayoría de los planes de inversión pública fueron, igualmente motivo de gran escándalo nacional y los medios de prensa de la oligarquía costeña descargaron toda su artillería pesada contra la débil e inservible Junta Militar que debió renunciar en Marzo de 1966, en medio de una amplia y general movilización de masas.

En el terreno de la política interna, la Junta aplicó un modelo represivo al más puro estilo “macartista”, que llegó a ser calificado como de clara identidad fascista por todos los sectores populares víctimas de la brutal persecución.

Su base de apoyo social la constituyó, en los inicios de la gestión, el sector más conservador de la clase propietaria y la Iglesia Católica, pero también logró integrar a ésta a un sector público de la administración, tecnocracia y clases medias atraídas por el lenguaje apolítico de la Junta.

La acción militar contra los organismos populares, organizaciones de masas y políticas, fue inmediata y fulminante. El estado de sitio, el toque de queda y todas las prohibiciones

concentraron el poder en manos de los Ministerios de fuerza pública —Gobierno y Defensa— que utilizaron ampliamente los archivos e investigaciones realizadas previamente por la CIA, como testifica en su libro el agente Phillip Agee.

La izquierda radical y los partidos comunistas —ya divididos— pasaron al repliegue y clandestinidad, mientras muchos de sus militantes eran hechos prisioneros por el nuevo régimen. La primera, representada principalmente por organizaciones como “Vencer o Morir” (ex-URJE) y otros sectores de vanguardia identificados con los métodos guerrilleros, asumieron señalados puestos en la lucha clandestina.

Extraordinaria importancia tuvo para un país de mínima expresión periodística de izquierda, la edición de una prensa clandestina realizada por estos sectores, entre cuyos periódicos destacaron los semanarios “La Chispa”, “Vencer o Morir”, y las caricaturas que se hicieron famosas, firmadas con el seudónimo de Avispa o Espartaco.

De otra parte, la coyuntura económica que mostrara favorables síntomas en un comienzo del período militar, se volvió extremadamente adversa y, “ya en 1965 los precios bajaron en varias de las exportaciones del país. Mientras bajaba el ingreso del gobierno por impuesto a las exportaciones, la Junta elevó la tasa para compensar la baja recolección. Esto provocó un cierre general de los negocios en Ecuador, ya que los comerciantes se negaban a pagar los nuevos impuestos. Los sindicatos, junto a los estudiantes más radicales se unieron con los comerciantes. La junta canceló el alza de impuestos.”²¹

La resistencia política abarcó, para fines de la administración militar “técnica” patrocinada por los Estados Unidos, a toda la población del país, y como bien señalan algunos investigadores y autores ecuatorianos, las fuerzas económicas que apoyaron el anticomunismo inicial, mostraron gran preocupación por las consecuencias que ello tendría en la aplicación de nuevos criterios de comercio exterior, en un momento en que se debilitaban las posibilidades de exportación hacia el mercado del mundo de occidente.

21/ *Patterns and Politics and Political System, Harry Kantor, U.S.A.*

A esta oposición se sumó también, el torpe manejo de los problemas regionales, que volvieron a reproducirse con vigor en el enfrentamiento interno. La Junta Militar tampoco logró introducir un esquema nacional de administración capaz de consolidar un proyecto integracionista para el país, y los roces entre los principales centros —Quito y Guayaquil— se vieron agudizados durante la dictadura.

Una manifestación organizada por el recientemente formado Frente Patriótico Nacional, y prohibida por la Junta Militar el 9 de Julio de 1965, fue finalmente llevada a cabo y ferozmente reprimida, mientras se agitaban consignas de orden netamente regionalista.

Los históricos y ya superados gritos de ¡Guayaquil, Guayaquil!! fueron apagados con bombas y balas. La reacción natural, en estas circunstancias fue considerar que la agresión consumada era contra la ciudad, y sus repercusiones fueron mortales para el destino de la Junta.

A medida que crecía el descontento contra la Junta, ésta aumentaba su nivel de represión interna. La gota que colmó el vaso, fue la invasión y allanamiento de la Universidad Central de Quito, a comienzos de Marzo de 1966. En ella murieron dos estudiantes y fueron apaleados y torturados algunos funcionarios y profesores, lo que determinó que la Junta se enajenara, definitivamente, el apoyo de algunos sectores sociales de clase media.

Poco tiempo después, la Junta caía y sus principales dignatarios serían enjuiciados por la propia clase dominante y organismos constitucionales, recibiendo algunos de ellos condenas penales de entrañamiento y destierro, así como toda la sanción moral y el desprestigio que revestía cada uno de los juicios a que fueron sometidos.

El fracaso de la Junta Militar pro-imperialista de 1963 puede y debe ser considerado, no sólo en la caracterización interna de una administración castrense más en la larga historia de intervenciones militares del país, sino principalmente en su calidad de exponente de un modelo, cuya incuestionable procedencia y paternidad norteamericana, se convierte en relevante fenómeno de análisis acerca del nuevo rol del militarismo en América Latina.

La Alianza para el Progreso, como teoría de dominación, contó con una cantidad ilimitada de herramientas y recursos, otorgados preferentemente por la docilidad de las administraciones civiles o militares adictas al imperio. La mejor ilustración de lo que afirmamos podemos deducirla del siguiente párrafo del convenio firmado entre Ecuador y los Estados Unidos, para llevar a cabo el Plan. Su artículo II, señalaba, explícitamente que:

“El Gobierno del Ecuador dará todas las facilidades y oportunidades a los representantes del Gobierno de los Estados Unidos para que observen y revisen sus programas y actividades, y llegará a suministrar cualquier información que ellos necesiten. . .”

Pese a éstas y otras importantes concesiones que entregaban, en muchos casos, el control más amplio y completo de los mecanismos administrativos, técnicos y políticos a los expertos extranjeros, el modelo “reformista” sufrió un rotundo fracaso en todo el continente.

Las soluciones “técnicas” para enfrentar el subdesarrollo demostraron su absoluta invalidez práctica y teórica y la idea de conciliar un modelo de desarrollo económico basado en el ideologismo anticomunista, descartando a amplios sectores populares, demostró que los intereses reales en juego estaban dados, más que en los afanes de mejorar las dramáticas condiciones de vida, en garantizar la seguridad de una cantera indispensable para la lucha hegemónica del imperialismo.

La Junta Militar de 1963 obtuvo algunos logros importantes para las necesidades coyunturales de los Estados Unidos, específicamente al reprimir el ascenso político y reivindicativo de la lucha de masas en el país, e identificó claramente un período histórico de nuestro continente, de acuerdo a las peculiares condiciones sociales y políticas de un país, cuyo caótico esquema de dominación interna sólo podía entregar esa tarea al cuerpo armado, como una de las instituciones más coherentes del aparato de Estado.

a.4.- La gestión nacionalista del gobierno de Rodríguez Lara (1972-74).

De todas las intervenciones militares que ha tenido el Ecuador, la gestión nacionalista del gobierno de las Fuerzas Armadas, encabezadas por el General Guillermo Rodríguez Lara, es

la que refleja con mayor propiedad el importante rol político que han jugado las instituciones militares en el país.

Nunca antes, el cuerpo armado había intentado ir tan lejos en la aplicación de un plan de transformaciones o de un modelo de desarrollo. La nueva y directa participación militar en las tareas de gobierno provocó controvertidas y dispares reacciones de parte de la población civil. Para algunos sectores de la izquierda, el modelo presentado seguía inserto en los planes de utilización de los cuerpos armados por parte de los Estados Unidos.

La desconfianza política de los sectores populares se había visto, igualmente reafirmada con las declaraciones de Nelson Rockefeller en 1969, tras su gira por América Latina. En aquella oportunidad, éste había sostenido:

“En resumen, está apareciendo un nuevo tipo de militar que, a menudo se está convirtiendo en una fuerza principal de cambio social constructivo en las repúblicas americanas. Movidos por una impaciencia frente a la corrupción, la falta de eficacia y el estancamiento del orden político, los militares de nuevo tipo están preparados para adaptar su tradición autoritaria a los objetivos del progreso social y económico.”²²

Obviamente, la exposición, del político norteamericano se encontraba notablemente influida por las características del reciente golpe militar de Octubre de 1968 en Perú, cuyas proyecciones más amplias y consecuencias aún no lograban vislumbrarse en plenitud.

La coyuntura mundial —a fines de la década— no permitían tampoco a los Estados Unidos un margen amplio y estricto para seleccionar las nuevas administraciones latinoamericanas y, mientras se cumpliera el objetivo de “seguridad interna”, planteado de acuerdo a las nuevas necesidades de dominación, podían mostrarse satisfechos de cuanto ocurriera en su “patio trasero”.

Los militares de “nuevo tipo” habrían de ir, sin embargo, un poco más lejos de las expectativas trazadas por los expertos del gobierno de Washington. El caso peruano se convertiría en relevante ejemplo de esta aseveración. La aplicación del Plan Inca era un desafío al que pocos sectores manifestaban su plena confianza.

^{22/} *Report of U.S. Presidential Mission for the Western Hemisphere, AID, Washington 1969, pág. 18, Nelson Rockefeller: Quality of Life in Americas.*

Pero la expropiación de propiedades mineras americanas, nacionalización del comercio exterior, apertura de relaciones con Cuba, control de los medios de comunicación en manos de la oligarquía, reforma agraria y organización campesina, etc., implicaron inevitables contradicciones con el imperialismo y el enfrentamiento alcanzó peligrosos niveles, como aquella oportunidad en que los Estados Unidos amenazaron incluso con aplicar la enmienda Hickenlooper al gobierno dirigido por el General Velasco Alvarado.

Analizar en mayor detalle la denominada "revolución peruana" escapa a nuestras posibilidades y su referencia en el presente estudio reviste la importancia de ejemplificar la trascendencia de un proceso que se convertiría, durante este período, en importante polo de atracción para otras instituciones castrenses del continente.

La experiencia fracasada del general Torres en Bolivia así lo demostraría. La evolución en su política externa del gobierno militar de Torrijos en Panamá también, y, volviendo a nuestro objetivo, Ecuador probaría su propio esquema nacionalista a comienzos de la nueva década.

La irrupción militar en Ecuador, a comienzos del año 1972, se realizó en medio de una especial coyuntura de todo el continente. Su característica más importante era, indudablemente, la dura posición antimperialista de muchos de sus gobiernos, que aprovechaban también las fisuras internacionales provocadas por la crisis de recesión del capitalismo mundial.

Internamente, Ecuador también vivía una especial coyuntura histórica. El 24 de Mayo de 1971, el U.S. News and World Reports anunciaba para los Estados Unidos, la transformación del país ecuatorial "de república bananera a segunda productora de petróleo en todo el continente".^{2 3} La información fue reproducida en los más importantes periódicos, y centro la atención inmediata de todos los sectores sociales y políticos.

Para las Fuerzas Armadas, que sostenían la dictadura de Velasco Ibarra instaurada en 1970 mediante un autogolpe de Estado, tras el quinto período presidencial del octogenario líder, la nueva riqueza habría de convertirse en estímulo fundamental a sus próximas decisiones.

Para fines de Septiembre de 1971, el Ministerio de Defensa había entregado una declaración pública que sobrepasaba las

23/ "Ecuador: experiencia peruanista", Gregorio Selser, *Revista Latinoamericana*, Berlín, No. 27-28, enero-mayo 1972, pág. 190.

atribuciones de la dictadura civil del propio Velasco.

La declaración específica, textualmente que, "los hidrocarburos y sustancias que los acompañen, son materiales estratégicos y es obligación del Ministerio, ejercer control, por intermedio del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre contratos, traspasos, operaciones de exploración, explotación, transporte, industrialización, etc."²⁴

Las Fuerzas Armadas se adelantaban y salían al paso de las detectadas y evidentes ambiciones civiles de los grupos dominantes, en orden a lucrar con la riqueza energética. Esta situación influyó, decididamente, para acelerar los planes de total control del poder por parte de las Fuerzas Armadas, y derrocar la dictadura velasquista en Febrero de 1972.

Ecuador vivía —hasta ese entonces— una peligrosa crisis económica y política. Agravada la primera de ellas por las débiles exportaciones y un cada vez más disminuido ingreso de divisas, como parte de toda una caótica situación de estancamiento en la agricultura.

La crisis política evocaba las peores épocas de inestabilidad, agravado por la amenaza de triunfo en las urnas para las próximas elecciones del líder populista de la costa Asaad Bucaram, ex-alcalde de Guayaquil, y principal dirigente del movimiento CFP (Concentración de Fuerzas Populares) que generaba la desconfianza y temor de todos los sectores más politizados del país.

El caudillo porteño y comerciante en telas de origen libanes, había conseguido una meteórica carrera política apoyándose en los grupos marginales del suburbio de la provincia del Guayas y había asumido, en alguna medida, la conducción de las disgregadas bases sub-proletarias del velasquismo, convirtiéndose en certera posibilidad de continuismo populista en Ecuador.

La dictadura velasquista del año 1970, extremadamente represiva contra el movimiento popular y estudiantil se había enajenado el místico apoyo de algunos sectores populares tradicionalmente de su lado, y había generado de igual manera, fricciones y masivo descontento en el interior de las Fuerzas Armadas, producto del mayoritario repudio y rechazo por parte de los sectores sociales afectados.

En medio de la convulsionada situación externa e interna,

24/ "Ecuador: Pasado y Presente", *Hacia un Desarrollo Moderno*, René Bdez, Quito, Universidad Central.

cobró fuerza en el seno de la institución militar la ideología nacionalista que formuló sus nuevas consideraciones acerca del país en un importante documento público: FILOSOFIA Y PLAN DE ACCION DEL GOBIERNO NACIONALISTA Y REVOLUCIONARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS. Sobre este marco teórico se inspiró el PLAN INTEGRAL DE TRANSFORMACION Y DESARROLLO, concebido para un período de cinco años.

El Plan Integral de Transformación y Desarrollo, elaborado con amplia participación de técnicos y economistas de la Junta Nacional de Planificación, para ser aplicado entre 1973 y 1977, era un plan ambicioso y sus elementos constitutivos fueron tema de profunda y controvertida polémica en el seno de las fuerzas políticas del Ecuador.

En efecto, las proposiciones de revertir las inmensas contradicciones sociales y económicas existentes, en los plazos y términos acordados, no podían ser tarea fácil. Especialmente en un país donde el esquema de redistribución de ingresos permite que “un 7 por ciento de la población absorba el 50 por ciento del ingreso total del país, mientras que un 54 por ciento —correspondiente al sectores sociales modestos— recibe sólo un 9,5 por ciento de ese ingreso.”²⁵

La exagerada desigualdad en el ingreso, hacen del Ecuador un país de reducida clase media. El ingreso per cápita en 1971 —US\$ 246— era uno de los más bajos de América Latina. Los índices básicos mostraban también, a fines de ese año, una sensible baja y tendencia al estancamiento. La situación no podía ser más grave para enfrentar cualquier proyecto de transformaciones.

Declaraciones como las de “actuar rápida y enérgicamente contra los grupos social y económicamente privilegiados”, contenidas en la Filosofía de las Fuerzas Armadas, no podían sino provocar una complicada mezcla de agitación, efervescencia y expectativas en todos los sectores políticos y sociales del país.

Las agrupaciones conservadoras y tradicionales mostraban cierta incredulidad cuya reacción posterior devino, como era de esperar, en una enérgica campaña contra todo intento de cambio. Esta actitud se mantendría durante los casi cuatro años del Gobierno de Rodríguez Lara, alcanzando en algunos

25/ “Nacionalismo y Petróleo en el Ecuador Actual”, Jorge Silva Luvecce, Ed. Universitaria, Quito, 1976, pág. 264.

momentos características violentas, cuyo climax fue la insurrección abortada del 10. de Septiembre de 1975.

Los sectores populares, mientras tanto, se encontraban divididos y fuertemente golpeados por las últimas dictaduras represivas, y apuntaron un tímido apoyo, no sin cierta desconfianza y cautela, al proyecto "nacionalista y revolucionario". Para los grupos más radicales, el nuevo programa merecía la calificación de "desarrollista", cuya única intención era modernizar el atrasado esquema productivo capitalista.

A pocos meses de iniciada la gestión nacionalista comenzaba a clarificarse un poco más la actitud de los distintos grupos políticos. En Agosto de 1972, el Partido Comunista Ecuatoriano llamó a realizar el Noveno Congreso y, en la tesis central presentada al mismo se refiere a lo que sucede al interior de las Fuerzas Armadas, donde "se desarrolla la conciencia patriótica y nacionalista, que gana amplios sectores de ellas, en oposición a los elementos de postura antipopular, reaccionaria y entreguista que existen en ella".²⁶

Más adelante, señala que "es preciso mantener con firmeza la actitud de apoyar los aspectos positivos de la acción del Gobierno Militar, respaldando aquellas acciones que coincidan con los grandes intereses de la nación y del pueblo". Así como también, "es indispensable para éllo seguir una amplia unidad política de todas las fuerzas antiimperialistas, democráticas y patrióticas, tanto civiles como militares, conforme a las orientaciones ya señaladas."²⁷

Otros sectores progresistas, como aquellos provenientes de grupos eclesiásticos, mostraban una mayor aprehensión y, en un editorial de la revista Mensajero, dirigida por el sacerdote jesuíta Luis. E. Proaño, se comentaba acerca de la "dicotomía y peligro del programa de gobierno".

"La ideología —indicaba el editorial— merece el nombre de revolucionaria nacionalista; el programa de acción, por el contrario, tiende a ser una reforma cuyas características parecen estar dadas por la eficiencia, la honradez administrativa y la tecnificación burocrática."²⁸

26/ *Tesis sobre el Noveno Congreso del Partido Comunista, Párrafo 7o., Agosto 1972, Quito, Ecuador.*

27/ *Id.*

28/ *Revista Mensajero, Abril 1972, Quito, Ecuador.*

El modelo planteado por las Fuerzas Militares suponía una gran variedad de obstáculos, ya endémicos, a superar antes de su posible concreción. Entre ellos, y de vital importancia, se encontraba el adormecimiento y desinterés de inmensos sectores sociales marginados totalmente, y explotados en forma inmisericorde durante ya varios cientos de años.

Allí se encuentra la población indígena que subsiste debilmente en las entrañas de otra nacionalidad dominante, representada por la minoría blanca y sectores mestizos acomodados. La población india suma más del 50 por ciento del total de habitantes en la zona territorial del Ecuador, pero su participación política y social es casi insignificamente. Su tarea y único papel se ha remitido a servir de sostén a la economía.

Víctimas de un racismo sin inhibiciones y de un trato despotico que caracteriza a la sociedad ecuatoriana acomodada, las diversas nacionalidades aborígenes mantienen sus propias estructuras culturales y forman, en la práctica una sociedad paralela, con su propia lengua quechua, sus costumbres y su aterradora miseria.

Ningún plan, ningún gobierno y ningún programa serio de cambios ha logrado hasta ahora levantar el nivel de subsistencia de éstas nacionalidades mayoritarias, e integrarlas a las estructuras existentes. El gobierno de las Fuerzas Armadas nacionalistas tampoco lo hará y eludirá los aspectos raciales, para referirse al problema campesino.

La presencia de esta dualidad de nacionalidades al interior de la sociedad ecuatoriana, genera indudables elementos de distorsión para el análisis de formación de clases sociales y constituye —como veremos en el siguiente capítulo de formaciones políticas— uno de los mayores problemas para la organización y fortalecimiento del movimiento popular.

El “boom” petrolero:

La aparición y posterior explotación del petróleo, ahora en volúmenes rentables de exportación, constituyó el gran impacto en la economía ecuatoriana. En dos años, el Producto Interno Bruto (PIB) fue casi duplicado —de US\$ 1.816 en 1972 subió a US\$ 3.475 millones en 1974— y el crecimiento económico logrado, de un 13 por ciento anual, superó largamente el promedio de América Latina, que llegó tan sólo a un 5 por ciento anual.

La nueva riqueza, tan altamente cotizada en el mundo en-

tero, abría para la tradicional república agroexportadora y bananera del Ecuador, múltiples posibilidades de aprovechamiento. El producto bruto per cápita se incrementó, paralelamente, de US\$ 260 en 1972 a US\$ 394 en 1974, y subió a US\$ 595 en el año 1975.

Pero, la nueva riqueza energética habría de despertar, proporcionalmente, todas las ambiciones en el espíritu de una ya caracterizada y codiciosa clase dominante. En igual medida, habrían de agudizarse los roces y enfrentamientos con la potencia económica y central y las empresas multinacionales que operan en el país.

El movimiento popular supo apreciar la importancia que tenía, en esos momentos, la presencia de las Fuerzas Armadas en el Gobierno. Especialmente si éstas declaraban su subordinación a un programa "nacionalista y revolucionario", lo que ofrecía una posibilidad más cierta de cautelar y utilizar esa nueva capacidad financiera en el desarrollo interno.

Esta posibilidad se vió, en un comienzo, notablemente reforzada por la presencia de determinados cuadros militares que mostraban rígida consecuencia con la aplicación del programa. Entre ellos, estaba el Contralmirante Gustavo Jarrín Ampudia, a la cabeza del Ministerio de Recursos Naturales, secundado por un valioso equipo de colaboradores civiles.

Su gestión, que duró casi dos años, fue vigorosa y decidida en materia de realizaciones. Ella permitió, en gran medida, poner en vigencia la nueva Ley de Hidrocarburos, materializó nuevos contratos con las empresas petroleras americanas, fue factor fundamental en la creación de CEPE (Compañía Estatal Petrolera Ecuatoriana) y la posterior adquisición del 25 por ciento de las acciones de Texaco-Gulf, principal compañía transnacional que opera en Ecuador.

La nueva legislación petrolera, de indudable espíritu y contenido soberano, constituyó en sus innumerables regulaciones jurídicas, un notable avance respecto a los anteriores criterios estatales frente a las materias primas. Ello facilitó la reversión a manos del Estado ecuatoriano de más de 4 millones de hectáreas que se encontraban en manos de las transnacionales, y de las cuales CEPE incorporó a su patrimonio 1.6 millones de hectáreas, limitando con esto el área de exploración y explotación en poder de las empresas foráneas a sólo 2 millones de hectáreas sometidas a claros y precisos compromisos por parte de éstas.

Su labor, al ser destacada y plenamente consecuente con la Filosofía de las Fuerzas Armadas, le mereció naturalmente todo el odio y acción beligerante de los intereses afectados, cuestión que se tradujo en una intensa campaña de boycot y desprestigio mientras estuvo a la cabeza de tan importante cartera ministerial.

En los momentos en que su nombre era propuesto y aceptado para la designación en el cargo de Presidente de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), cartel mundial al que, mediante su gestión, Ecuador adscribió, y en medio de una coyuntura en que las “multis” presionaban, obedeciendo las consignas del gran capital, en orden a rebajar el precio del crudo, el Ministro Jarrin Ampudia debió renunciar a su cargo.

En un documento público dado a conocer por el propio Comandante Jarrín, a mediados del año 1976, el ministro “de la soberanía” como se le llamó, explica el origen de las presiones sufridas durante su gestión en la cartera de Recursos Naturales y Energéticos:

“La campaña en contra del ‘comunismo’ —denuncia Jarrín— de los asesores del ministro, originada en la CIA, auspiciada por las compañías, compartida por sus funcionarios y amigos, y repetida en todos los niveles hasta ahora, aislaron a las personas independientes que sabían sobre esta materia.”²⁹

La forzada renuncia y el próximo destino a cargos en el exterior del Contralmirante fue considerado, por todos los observadores del proceso ecuatoriano, como el primer gran revés político del gobierno nacionalista de las Fuerzas Armadas. A esto debe sumarse también, la renuncia del titular de Agricultura, Guillermo Maldonado Lince, que representaba lo más avanzado en términos del proyecto de reformar el agro del país.

La situación internacional era, en aquel entonces, especialmente tensa. La actitud soberana y comprometida del Ecuador, junto a las posiciones del Tercer Mundo, cuestión realzada incluso con la cita de países de la OPEP realizada en Quito, era contradictoria y peligrosa para los nuevos y agresivos pasos dados recientemente por los Estados Unidos contra América Latina.

El proyecto nacionalista comenzaba, a dos años de iniciado, a navegar con “mar gruesa” y los próximos momentos serían, de suyo, especialmente dramáticos.

29/ *“Situación de la Política Petrolera”, Contralmirante Gustavo Jarrín Ampudia, Quito, 6 de Junio de 1976.*

El gobierno militar ecuatoriano y sus sectores más progresistas, acusaron el golpe recibido, y la renuncia y alejamiento del contralmirante enterró también, en ese entonces, las sugerencias elaboradas en un documento de la Armada, en orden a nacionalizar, mediante la compra del 51 por ciento de las acciones toda la explotación petrolera en el país.

Otras agresiones de parte de los Estados Unidos sirvieron para apoyar la acción de las compañías multinacionales. La Nueva Ley de Comercio Exterior, excluyendo a Ecuador y Venezuela de las preferencias arancelarias, por pertenecer a la OPEP, marcó la pauta del nivel de presiones ejercidas contra este meridiano país. La sanción dañaba a Ecuador —según estudios realizados— en cerca de 19 millones de dólares anuales, perjudicando especialmente a artesanos y pequeños empresarios.

La salida del comandante Jarrín y la readecuación de la política petrolera ecuatoriana, marcó, como señalábamos anteriormente, una etapa fundamental para el programa e ideología del proceso nacionalista del Ecuador. Etapa que, pese a la conflictiva situación actual, marcó avances destacados para el desarrollo económico del país.

Entre aquellos, adquiere especial importancia la base de un futuro complejo petroquímico, con la construcción de la Refinería Estatal de Esmeraldas, diseñada para procesar 55 mil barriles diarios y que comenzará a funcionar a fines del año 1976, financiada en un 100 por ciento con recursos nacionales.

La creación de la propia CEPE, duramente criticada por los grupos conservadores y otros sectores pro-imperialistas, ha sido reconocida por todos los observadores neutrales como la “viga maestra” y el “primer gran paso hacia el manejo directo de la industria petrolera, y base de una futura nacionalización en el país.”

También deben considerarse, en el terreno de las realizaciones de CEPE, y en la política de la primera gestión del Ministerio de Recursos Naturales, la proyección de una planta de Gas en Sushufindi, en el Oriente, y la construcción de oleoductos con terminal en suelo ecuatoriano, cuestión lograda contra los deseos de las “multis”, que pretendían utilizar puertos de embarque en Colombia para el petróleo ecuatoriano.

Otras obras de infraestructura, como la construcción de terminales para productos limpios, creación de FLOPEC (Flota Petrolera Ecuatoriana), y otros medios de transporte carretero

resultan de gran trascendencia para un futuro manejo soberano de la riqueza energética.

El “boom petrolero” permitió —pese a las más polémicas y tendenciosas opiniones realizadas al respecto— la inversión de nuevos ingresos en sectores fundamentales de infraestructura, obras públicas y servicios. El inmenso volumen de divisas, aunque fortaleció a los grupos económicos dominantes en desigual proporción de los sectores sociales más postergados, como veremos más adelante, fue repartido —de acuerdo a cifras oficiales— conforme ilustra el siguiente cuadro:

PARTICIPES DE LOS INGRESOS PETROLEROS
(16 de Agosto 1972 a 31 de Diciembre 1975)
—Miles de sucres—

	VALOR	o/o
1) <i>Presupuesto General del Estado</i>	7.795'067.8	32.47
2) <i>FONADE (Fondo Nacional de Desarrollo)</i>	6.368'396.3	26.52
3) <i>INECEL (Electrificación)</i>	2.816'276.7	11.73
4) <i>Fondo Nacional de Participación</i>	453'266.0	1.88
5) <i>Otros (medio ambiente, vivienda, desarrollo social, etc.)</i>	6.008'208.4	27.38
TOTAL	23.541'215.2	

FUENTE: “Rendimiento de los ingresos petroleros”, Elaboración: junio de 1976.
Cit. Documento de Gustavo Jarrín A., Revista NUEVA No. 31, julio/76.

La creación de FONADE (Fondo Nacional de Desarrollo) en el año 1974, tuvo destacada importancia financiera en la canalización de los nuevos recursos para obras de desarrollo interno, y es una de las iniciativas en este sector, más aplaudida de la pasada gestión militar. El detalle de sus inversiones nos ilustra mejor sobre el objetivo del mismo:

*DISTRIBUCION EFECTIVA DE LOS RECURSOS DE FONADE
1974-1975*

-Miles de dólares USA-

<i>D E S T I N O</i>	<i>1974</i>	<i>1975</i>
<i>Construcción Refinería Esmeraldas</i>	21.440.0	57.666.8
<i>Ministerio de Educación</i>	3.589.0	4.519.8
<i>Banco Nacional de Fomento</i>	20.075.0	5.278.9
<i>Abastecimiento y Obras de Emergencia</i>	6.060.5	—
<i>Comisión de Valores</i>	9.990.8	100.0
<i>Obras Públicas (Ministerio)</i>	2.954.4	13.711.3
<i>Desarrollo Cultural</i>	439.5	300.0
<i>CEDEGE</i>	591.2	514.8
<i>INERHI</i>	412.0	792.1
<i>Fondos Financieros</i>	8.000.0	—
<i>Instituto Geográfico Militar</i>	1.414.1	—
<i>Centro de Rehabilitación de Manabí</i>	412.8	—
<i>MICEI (Ministerio de Industrias, Comercio e Int.)</i>	2.920.0	—
<i>FONAPRE</i>	—	2.000.0
<i>Ministerio de Agricultura</i>	—	5.240.0
<i>Presupuesto del Estado</i>	—	28.000.0
<i>Universidades y Politécnicas</i>	—	8.416.0
<i>T O T A L E S</i>	78.299.4	126.539.7

FUENTE: Documento "Política Petrolera en Ecuador", junio de 1976.

La administración militar introdujo un anteriormente desconocido elemento de racionalidad en las tareas del Estado que logró modificar su anterior fisonomía oligárquica-liberal, para convertirse inesperadamente en un instrumento de clases capaz de satisfacer las necesidades del ahora modernizado esquema capitalista de la sociedad.

Desgraciadamente, y ello renunciando a todas las promesas iniciales, los nuevos ingresos no se invirtieron, como continuamente se predijo, en lo que constituiría la real "siembra del petróleo", esto es, la reforma agraria y mejoramiento de los caóticos niveles de subsistencia y relaciones de producción en el campo ecuatoriano.

Una nueva ley, expedida por decreto en 1974, amenazaba con cumplir una ansiosa promesa hecha a los campesinos, pero disposiciones posteriores, aplazaron su aplicación hasta el mes de Enero de 1976, otorgando un plazo de gracia de dos años a

los terratenientes para que trabajaran las tierras, y cumplieran con la exigida "función social" de la misma. En el año 1963 —como escribíamos anteriormente— los latifundistas obtuvieron un plazo de gracia de tres años. . . que tampoco se cumplió.

Aunque, si bien es cierto se realizaron algunos esfuerzos en orden a modernizar sobre todo las precarias relaciones serviles de producción, para transformarlas en trabajo asalariado, se introdujeron también gran cantidad de tecnologías nuevas que desplazaron a enormes sectores hacia la marginalidad urbana.

En un país con cerca del 60 por ciento de población rural, la Reforma Agraria debía ser el punto de partida para cualquier Plan de Desarrollo del capitalismo dependiente —o para el "subdesarrollo moderno" como lo denomina el analista ecuatoriano René Báez— pero el proyecto solo favoreció a un reducido grupo de empresarios agrícolas y no tocó, en absoluto, a los grandes latifundistas ni a la poderosa oligarquía agro-exportadora (banano, cacao, azúcar) de la Costa.

Las consecuencias son de fácil predicción y, el no enfrentar una vez más este estratégico sector, significó que el crecimiento económico del mismo llegara a ser uno de los más bajos. Alcanzó un promedio anual de un 2.9 por ciento, cuando se había previsto en el Plan de Transformación Integral, un mínimo de un 5.3 por ciento anual, en el período quinquenal planificado.

Crecimiento sin desarrollo:

La experiencia militar nacionalista del gobierno de Rodríguez Lara, como se ha venido demostrando en diferentes estudios y análisis realizados últimamente en el país, logró impulsar las bases para un crecimiento significativo en algunos sectores productivos, pero que globalmente no se tradujo en un desarrollo económico y social trascendente para los mayoritarios grupos sociales del país.

La redistribución del ingreso, así como la distribución funcional del mismo, como uno de los objetivos primordiales del proyecto nacionalista, no fue sustancialmente mejorada y, por el contrario, como lo demuestran informes no desmentidos, sufrió una importante regresión, agravada por el implacable flagelo inflacionario.

En el plazo de tres años el proceso inflacionario alcanzó a un 57 por ciento, mientras que los grupos que viven de un salario, lograban incrementar sus ingresos —durante el mismo período— en apenas un 35 por ciento.

Crecimiento y desarrollo —como ha sido ya científicamente comprobado— no son términos similares o equivalentes. Los propósitos de construir una sociedad “en que la redistribución del ingreso asegure una justa participación del sector asalariado, en el producto social generado por el aparato productivo”, como especificara a la letra la Filosofía y Plan de Acción de las Fuerzas Armadas, se vuelven, con poderosos argumentos, términos insoslayables en la visión crítica de la pasada gestión militar.

De dicho enfoque no podemos excluir tampoco las características de la coyuntura internacional que, siendo de favorables síntomas en el inicio de la gestión nacionalista, se tornó extremadamente negativa a medio proceso, especialmente en el agudizamiento del deterioro, ya tradicional, de los términos de intercambio entre la metrópoli y los países periféricos.

La crisis energética y la curva recesiva del capitalismo internacional encareció los productos manufacturados, congelando negativamente los necesarios y proporcionales mejoramientos de precios en las materias primas, única fuente de divisas de los países estrangulados en su desarrollo. Hay que agregar que Ecuador, al igual que Venezuela, Irán e Indonesia, no participaron del embargo de petróleo a los Estados Unidos.

Internamente pudieron, sin embargo, ser tomadas algunas medidas básicas que aliviaran la negativa situación exterior. Entre ellas y de vital importancia y repercusiones nacionales —como indicábamos anteriormente— figuraba la Reforma Agraria.

Dicha transformación habría beneficiado no solamente a las 3/4 de la población que se encuentran ligadas a la agricultura, sino que habría repercutido directamente en el mejoramiento y diversificación de la oferta de materias primas nacionales para la industria y la sustitución de algunos productos importados, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades de una población de acelerado crecimiento como la ecuatoriana.

Las modificaciones a la estructura de propiedad vigentes no fueron concretadas incidiendo gravemente en la oferta de

productos y variación de precios en el mercado interno de un ya jibarizado presupuesto familiar.

Ecuador, con una tasa de crecimiento demográfico —3.4 por ciento anual— superior a muchos países del continente latinoamericano ha sido incapaz, hasta ahora, de siquiera rasguñar el poder oligarca y semi-feudal sobre la tierra. La llegada de los militares con un plan “nacionalista y revolucionario” había abrigado esperanzas de que, por primera vez, el agro fuera reformado. No fue así.

Esto queda plenamente demostrado al comparar las metas planteadas en el Plan Quinquenal con los informes oficiales de los organismos pertinentes. De acuerdo a ellas, se pretendía dar acceso a la tenencia de la tierra a 75 mil familias para 1977, a lo cual había que agregar, en cifras de colonización, 467 mil hectáreas que beneficiarían a 15 mil familias.

Hasta fines de 1975, sin embargo, y de acuerdo a cifras comprobadas se pudo conocer que el IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria) había actuado únicamente sobre 346 mil hectáreas, de las cuales la mayoría corresponde a colonización, y sólo un 14 por ciento a Reforma Agraria.

El número de familias beneficiadas ascendió —en todo el período— a 12.500, de las cuales la mayor parte (86 por ciento) correspondió como indicábamos precedentemente de cifras de colonización, con un total de 297.560 hectáreas, que significaba haber cumplido con un porcentaje aproximado al 50 por ciento de las propias metas del sector.

En materia de reforma agraria, se repartieron 48.440 hectáreas entre 5.660 familias, lo que contemplaba un porcentaje realmente mínimo de las metas ya propuestas en el Plan, que había establecido un área mínima de cerca de 1 millón de hectáreas por ser reformadas. La gran propiedad, que se encuentra en manos de no más de 150 propietarios, con haciendas que alcanzan algunas hasta 40 mil hectáreas de tierra, no fue tocada.

Contrariamente a lo esperado y aconsejado por los sectores más lúcidos y progresistas del país, las medidas antiinflacionarias tomadas por el Gobierno fueron dirigidas a “incentivar la producción agropecuaria con el apoyo financiero y subsidiario”, que merecieron, por parte de los sectores populares una violenta respuesta.

Las organizaciones clasistas reafirmaron la opinión de que “no puede haber aumento de la producción agropecuaria, ni desarrollo de la industria en los marcos de un régimen semi-feudal y dependiente, dentro del cual se pretende seguir actuando.”³⁰

Pese a todo, el sector industrial mostró, en términos proporcionales, el más alto nivel de crecimiento durante la gestión nacionalista. Ello, especialmente en comparación con otras áreas productivas y considerando que la inversión pública superó, en esta ocasión, a la privada, con un promedio anual de 17.6 por ciento, mientras la proveniente de grupos privados alcanzaba a un 16.6 por ciento.

El siguiente cuadro nos ilustra, en porcentajes, acerca de los promedios generales alcanzados en los últimos cuatro años por diferentes sectores productivos:

METAS Y PORCENTAJES ALCANZADOS EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE ALGUNOS SECTORES BASICOS
Período entre 1973-1975

<i>SECTOR</i>	<i>Tasa de crecimiento anual propuesta en el Plan 1973-1975</i> <i>o/o</i>	<i>Tasa de crecimiento real durante los 3 últimos años (promedio)</i> <i>o/o</i>
<i>AGROPECUARIO</i>	5.3	2.9
<i>MANUFACTURA Y MINERIA</i>	10.1	11.8
<i>CONSTRUCCION</i>	11.2	9.7
<i>ELECTRICIDAD</i>	12.8	4.9

FUENTE: NACIONALISMO Y PETROLEO EN EL ECUADOR ACTUAL, por Jorge Silva Luvecce, Ed. Universitaria, Quito, 1976. "Premio Nacional de Ensayo 1976".

Pero, como ocurre siempre en el crecimiento de sectores productivos dentro de un esquema ya distorsionado e inarmónico, el relativo auge del rubro industrial y manufacturero en Ecuador, estuvo enmarcado en las características tradicionales de los países de capitalismo dependiente.

Más preocupada de la rentabilidad y maximización rápida de las ganancias, la industria ecuatoriana trabaja con un míni-

30/ "La CTE y las medidas económicas", prensa local, Marzo 1974.

mo de su capacidad instalada, satisfaciendo la demanda de las capas de altos ingresos e incorporando líneas de producción sofisticadas y antieconómicas, dentro de un círculo vicioso consumista suntuario e importador de tecnologías inadecuadas para el país.

La débil e inadecuada legislación respectiva permitió una aún mayor concentración de capitales mediante un proceso de monopolización encubierto bajo formalidades de sociedades anónimas que reproducían, vorazmente, sus ganancias. Un informe publicado por un periódico de la capital, transcribía los balances de la Superintendencia de Compañías; a comienzos de Mayo de 1975:

“El ritmo de formación de nuevas compañías —señalaba el informe— es cada vez mayor. Los activos totales manejados por las compañías subieron a 27 mil millones en 1971, mientras en 1968 llegaban solo a los 13 mil millones; en 1973 pasaron los 40 mil millones. El patrimonio y el capital —agregaba— han crecido correlativamente. El monto de las utilidades obtenidas por un grupo homogéneo de 1.063 compañías que operan en el Ecuador creció muy rápidamente entre 1971 y 1973. . . . Para 1974, por una serie de factores, ese incremento será aún mayor. En 1973, la relación utilidad-capital fue de 134.5”.³¹

La participación extranjera en las empresas nacionales adquirió, en los últimos cuatro años, un incrementado ritmo de crecimiento que, sin considerar las inversiones petroleras, alcanzó un volumen de aumento calculado en el 264 por ciento con respecto a 1972. La inversión foránea, que en 1972 era calculada en 135.4 millones de sucres, subió en 1975 a 370.5 millones de sucres.

Por ésta razón, podemos concluir en que, aunque el sector haya mostrado un mayor crecimiento relativo, respecto a otras áreas de la economía ecuatoriana, originado en gran medida por la abundante legislación de estímulo y algunos logros im-

31/ *Diario “El Tiempo”, 3 de mayo de 1975.*

portantes en el plano de los convenios internacionales, la mayoría de las características denunciadas por el propio Plan y Filosofía de las Fuerzas Armadas, permanecen intactas tras su gestión.

A ello contribuyen también las desfavorables condiciones de competencia que tienen los industriales nacionales con los grupos importadores instalados en el país, cuyas representaciones cuentan con poderosas influencias en el medio local para desvirtuar e incluso no acatar la legislación protectora de la industria.

Las mayores debilidades del experimento nacionalista, quizás podamos encontrarlas en el campo del Comercio Exterior donde, no sólo se reforzó el poder de los grupos monopólicos dominantes, sino se frustró toda esperanza de rescatar, para objetivos de bienestar social y colectivo, así como para servir de sostenimiento al proceso de industrialización, las malgastadas divisas que corresponden a la importación suntuaria del país.

Las aspiraciones en orden a lograr una nacionalización del Comercio Exterior, como lo había venido realizando progresivamente el proceso peruano, se vieron prontamente remitidas a la realidad de un gobierno insuficientemente preparado para enfrentar las poderosas Cámaras de Comercio.

La promulgación de un Decreto Ley destinado a restringir las importaciones y gravar con nuevos aranceles la comercialización de productos de lujo, fue el detonante de una de las más intensas crisis que vivió el gobierno de Rodríguez Lara y el ministro de la cartera de Finanzas debió renunciar al cargo.

Otros avances importantes, como aquellos obtenidos en la Pequeña Industria y Artesanía no alteraron la conducta tradicional de los grupos dominantes en orden a flexibilizar su ideología conservadora de acumulación, aunque en definitiva contribuyeron a formar un sector más coherente de clases medias en el país.

El Pacto Andino —con todas sus crisis y desequilibrios— permaneció como el principal atractivo para la inversión futura, y muchos de los planes y programas contenidos en sus Decisiones o Acuerdos, han comenzado a implementarse internamente, con la instalación de algunas industrias importantes en zonas geográficamente más necesitadas.

Ultimamente, Ecuador sostuvo una de las posiciones más duras con el propósito de defender el compromiso regional de los ataques promovidos por Chile contra algunas de sus decisiones referentes a repatriación de utilidades para el capital extranjero y desgravación arancelaria.

La programación andina, de aplicarse, especialmente aquella relacionada con la industria metal mecánica, automotriz y petroquímica, aunque sometida a contradicciones de todo orden, principalmente con el capital multinacional, ofrece una cierta posibilidad de modificar la actual realidad económica y social, y a través de la participación en los programas sectoriales desarrollar la industria básica, notablemente retrasada en el país.

El Pacto Andino, con todas sus deficiencias y problemas, ha constituido en Ecuador un relevante estímulo en los últimos años. Especial trascendencia tiene y tendrá la industria petroquímica, en la cual el gobierno de Rodríguez Lara dió los pasos fundamentales para cubrir la necesidad planteada en los programas sectoriales.

La indefinición existente en los planes de reformar la agricultura, de manera de transformar el esquema productivo y la oferta interna, continuará siendo uno de los más graves frenos a los objetivos planteados, incluso por algunos grupos industriales, en orden a generar una adecuada y plena utilización de las materias primas existentes en el país.

De igual manera, en un país donde más de la mitad de la población está marginada del mercado de bienes, las posibilidades de tentar hacia la inversión manufacturera o productos de consumo básico se vuelven obviamente utópicas.

Ese limitado mercado interno subsistirá —naturalmente— mientras subsista la actual estructura de propiedad agrícola y mientras se mantengan formas precarias en el campo, y persistan relaciones de producción superadas en el mundo entero, como las del pago en especies.

A modo de conclusiones:

Ecuador no fue ni podía ser una excepción ajena a la agresión imperialista que sufrieron la mayoría de los países latinoamericanos en la última década. La "cola del dragón" se des-

cargó, a última hora también contra este meridiano país. La forzada renuncia de Rodríguez Lara, luego de recibir mortales golpes durante su gestión, tornó, una vez más, frustrantes las esperanzas de cambio surgidas en los planteamientos nacionalistas.

El golpe de gracia lo dieron —como en anteriores oportunidades— los sectores comerciantes y la burguesía agro-exportadora e importadora de Guayaquil, unificada para estos objetivos con la aristocracia y burguesía comercial de la Sierra. La CIA, como lo denunciaron autoridades, fue parte importante en las maniobras para imponer un gobierno de corte “fascistoi-de” en los últimos años.

El 10. de Septiembre de 1975 marcó la pauta de una intensa y provocada crisis interna. El cruento “putsh” militar, calificado por el primer mandatario como de contenido “fascista”, y cuyo principal líder, el General González Alvear se refugiara en la embajada de Chile, una vez frustrado el intento, mostró una correlación de fuerzas que se debatía no solamente en el seno del cuerpo armado ecuatoriano, sino que se ligaba a los criterios geopolíticos de expansión de la nueva fuerza militar del Cono Sur.

La participación civil en el conato antinacionalista fue mínima. Apenas algunos grupos conservadores y organizaciones ad hoc de la oligarquía, junto a sectores lumpen y agitadores profesionales ingresaron al palacio, una vez desalojada la guardia presidencial.

Las reservas progresistas al interior del Ejército y Marina, ya desgastadas por el ejercicio político, y desorganizadas internamente, hubieron de ceder ante posiciones más temerosas y moderadas. Las fuerzas populares se encontraban ya absolutamente desvinculadas del plan de gobierno y asumieron, como era natural, una simple posición espectadora, aunque rechazaban duramente en sus declaraciones al intento derechista.

La intención de revertir por la fuerza una administración militar muchas veces calificada de “centrista”, para favorecer los intereses más reaccionarios del país y del continente, constituía solamente un desenlace evidente para una situación que se apreciaba madura en el ambiente político interno. Los golpes más importantes ya se habían dado y la salida de dos figu-

ras —Jarrin Ampudia y Maldonado Lince— de las carteras estratégicas (Recursos Naturales y Agricultura) marcaron el final de una gestión que careció de visión y habilidad para cumplir con su cometido.

Un ambicioso plan de transformaciones no podía —y así lo han debido reconocer elevados dignatarios oficiales del pasado régimen— carecer de una base sólida de apoyo social. Menos aún cuando, la aparición del petróleo convertía cualquier intento nacionalista en víctima de los más poderosos intereses y presiones, tanto nacionales como internacionales, en pos de tan codiciada riqueza.

Extraordinaria importancia tuvo, durante toda la gestión de Rodríguez Lara, la propiedad y manejo de los Medios de Comunicación de Masas. Este sector se encuentra, casi en su totalidad, y en una desproporción abismante en comparación con otros países, en manos de los grupos económicos dominantes. La mayoría de los órganos de prensa escritos, radiales y televisivos son propiedad de grandes consorcios financieros y políticos.

La historia y realidad política objetiva del Ecuador tampoco fue favorable a esa fusión más fuerte de intereses entre pueblo y gobernantes militares. La atomización partidaria y política que existe actualmente en todo el espectro de la izquierda, y debido en gran medida a la débil e incipiente formación social del proletariado, así como en la subsistencia del problema de nacionalidades, dificultó notablemente ese acercamiento.

Esta situación se manifiesta, de manera más relevante aún, en la existencia de tres organizaciones sindicales estructuradas a nivel nacional:

— La CTE (Confederación de Trabajadores Ecuatorianos) de larga trayectoria e inspirada en la teoría marxista-leninista, controlada mayoritariamente por el PCE (Partido Comunista Ecuatoriano) e integrada por 12 Federaciones profesionales localizadas en cada provincia (de un total de 20 provincias sólo en 12 tiene representación) y que hasta el año 1972 contaba con cerca de 70 mil afiliados, con fuerte participación de organizaciones artesanales y una de las mayores organizaciones indígenas en su seno, la FEI (Federación Ecuatoriana Indígena);

— La CEDOC (Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas) de orígenes e inspiración cristiana y eclesiástica, reúne a cerca de 40 mil trabajadores y posee una gran influencia en los sectores campesinos de la costa;*

— La CEOLS es la tercera de las organizaciones y ya su denominación (Central Ecuatoriana Obrera de Sindicatos Libres) denuncia su procedencia bajo inspiración de organismos sindicales norteamericanos, dirigidos por la AFL-CIO, en el proyecto de sindicalización paralela que lanzara hace algunos años, en pleno auge de la Alianza para el Progreso. Esta organización logró sin embargo, liberarse del tutelaje norteamericano, tras diversos enfrentamientos internos, especialmente a partir de la experiencia militar frustrada de 1963-66, y cuenta actualmente con cerca de 30 mil afiliados, con un trabajo extendido principalmente al sector industrial y de servicios en las zonas urbanas.

Esta situación de paralelismo y división orgánica del movimiento de masas ha sido considerada, por los principales dirigentes de la izquierda, como factor determinamente de las clases populares en su incapacidad para pasar a un plano más ofensivo levantando, en alguna forma, un proyecto alternativo de perspectivas políticas más ciertas y viables. En este sentido no se plantea ni siquiera la posibilidad de constituirse en alternativa de poder en el corto plazo, sino mejorar, aunque sea levemente, la capacidad de negociación política de la izquierda que, actualmente es mínima.

Al iniciar este capítulo sosteníamos que es, precisamente en el Gobierno nacionalista de Rodríguez Lara, donde las Fuerzas Armadas probarán, con mayor fuerza, el rol político que han venido jugando en toda la historia de desarrollo institucional del Ecuador.

Dicho rol político se vió claramente reafirmado en la presentación de un modelo económico de desarrollo interno, con planes de largo alcance y suscitando al mismo tiempo consenso

*/ *A mediados del año 1976, la CEDOC sufrió una fuerte división interna, y los sectores más progresistas, encabezados por el Secretario Nacional Campesino, lograron desplazar a las corrientes "masperianas" y conservadoras de la organización, en lo que fue considerado un fuerte revés para la Democracia Cristiana ecuatoriana que aspiraba a hegemonizar el control interno de esta importante Central Sindical del país.*

y apoyo de amplios sectores populares. La propia coherencia interna del Plan Integral de Transformaciones y Desarrollo, plantea ya, una vital diferencia con anteriores intervenciones castrenses.

En alguna medida se intentaba revivir en Ecuador la experiencia de otros países latinoamericanos, pero con un atraso de varias décadas. El proyecto, ligado desde sus orígenes a algunos grupos industriales nacionales, intentaba levantar una nueva fórmula de poder que, en lo político significará el apoyo de los sectores medios y proletarios, y que en lo económico pretende generar una suerte de desarrollo capitalista autónomo.

El modelo, sostenido anteriormente por burguesías con pretensiones nacionalistas en distintos países de América Latina —Cono Sur especialmente— y representado por diferentes administraciones reformistas, había mostrado a la larga un fracaso que, en definitiva, era el fracaso del capitalismo dependiente y la imposibilidad de superar algunas contradicciones dentro de este sistema.

Una suerte de ingenuidad política entrañaba el plan y se veía después reflejada nítidamente en algunas apreciaciones del propio mandatario, como aquellas intenciones de hacer un gobierno “de clases medias”, que chocaba con la implacable realidad económica y social, cuyos agudos desniveles confieren a este sector, de limitada participación política y pauperizada situación económica, un menos signifiante cuadro de posibilidades que las existentes en el mayoritario sector marginal y proletario del país.

No era entonces en las clases medias —de donde provienen la mayoría de los cuadros militares— en donde podía encontrarse la base social más fuerte de apoyo a una gestión de cambios, aunque no podía prescindirse de ella. Probar nuevamente el esquema reformista fracasado en las últimas décadas en América Latina, aunque se contara con un nuevo ingrediente de “pluralismo”, no podía conducir al éxito de los planes de desarrollo.

Por otra parte, los esfuerzos por transformar el viejo Estado oligárquico liberal y desarrollar el Estado capitalista, en un país donde imperan las más ortodoxas formas del superado “laisse faire”, propio del liberalismo del siglo pasado no

constituían, de por sí solamente, tarea suficiente para enfren-
tar los desafíos de modernización interna.

El rol del nuevo Estado, proyectado como instrumento y
palanca de desarrollo, impulsando tareas fundamentales y es-
tratégicas —aunque notablemente mejorado en la pasada ges-
tión— requería de otras medidas complementarias que, a nivel
social y político, controlaran y limitaran la iniciativa anárquica
y desordenada del sector privado.

En este sentido existió una notable confusión al interior
del equipo militar que dirigió la experiencia nacionalista, así
como en los asesores civiles que estuvieron detrás de la misma.
El temor hacia el estatismo y, más aún, contra toda forma de
utilización del aparato central, hizo que muchos de los funcio-
narios responsables de la gestión pasada, se convirtieran en los
principales agitadores de las consignas del sector privado que,
en el caso ecuatoriano, se encuentra mayoritariamente entre-
gado y dependiente al capital foráneo.

La indefinición, agravada al interior de los cuadros castren-
ses, en donde se mantiene una incierta correlación de fuerzas
que se expresa, fundamentalmente en un gobierno de adminis-
tración más que de plan político, ha obligado a la cautela de
parte de los sectores más comprometidos con la filosofía
nacionalista en esta etapa de escalada reaccionaria y antipatrió-
tica.

Lo que para muchos intelectuales nacionales es calificado
como una “historia de frustraciones”, no puede interpretarse
sino como un desencuentro permanente que ha tenido la cla-
se que, en determinados períodos históricos ha debido jugar un
papel revolucionario, con la rueda del tiempo que, para Ecua-
dor tiene peculiares características que han operado, siempre,
en beneficio de la manipulación de los grupos dominantes más
conservadores.

Los militares —en la situación descrita— han sido más que
causa de inestabilidad política, expresión y alternativa a la mis-
ma, en la permanente defensa de un sistema capitalista de desa-
rrollo, y en reemplazo de las incapacidades intrínsecas de los
grupos dominantes, cuyo paradójal conflicto y acuerdo les ha
impedido ofrecer un esquema “eficiente” de desarrollo econó-
mico y control social y político.